

# CAPÍTULO 4

## LOS VÍNCULOS ENTRE VIOLENCIA, DESIGUALDAD Y PRODUCTIVIDAD

- América Latina y el Caribe es la región más violenta del mundo.
- La desigualdad fomenta la violencia criminal, política y social en ALC.
- Debido a que la violencia afecta desproporcionadamente a los más vulnerables, perpetúa y amplifica la desigualdad en varios aspectos del desarrollo humano, incluidos los derechos, los ingresos, la salud, la educación y la representación política.
- La violencia también afecta el crecimiento económico a través de su impacto en las personas, las empresas, las comunidades y las instituciones.
- Por lo tanto, la violencia es un factor importante que subyace a la trampa de bajo crecimiento de alta desigualdad en ALC y su erradicación requiere intervenciones políticas activas en varias áreas.
- Dada la prevalencia de la violencia y sus graves repercusiones en el desarrollo humano, la región necesita desesperadamente más y mejores datos, especialmente sobre las formas más graves de violencia que la afligen.

## 4.1. La violencia subyace a la trampa de alta desigualdad y bajo crecimiento en ALC

La violencia sigue siendo un elemento excesivamente común de la vida de muchas personas de la región de América Latina y el Caribe. La región alberga solo al 9 por ciento de la población mundial, pero actualmente registra el 34 por ciento del total de muertes violentas<sup>1</sup>. El PNUD señaló en 2013 que la mayoría de los países de ALC exhibieron tasas de homicidio consideradas como epidémicas según las definiciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un hecho que se mantiene hasta la fecha<sup>2</sup>. La violencia o la amenaza de violencia en varios contextos se han convertido en una ficha de negociación entre actores estatales y no estatales para conseguir y mantener acuerdos. Por esta razón, la violencia se ha convertido en un elemento fundamental de la lucha por la distribución de recursos, derechos, oportunidades y poder en la región<sup>3</sup>. Es, además, un factor común subyacente que impulsa y es potenciado por la trampa de alta desigualdad y bajo crecimiento de la región.

Una mayor desigualdad puede fomentar las condiciones para un aumento en la violencia. Desde un punto de vista económico, el razonamiento detrás de este vínculo es que mayores disparidades introducen incentivos que hacen que los rendimientos de las actividades ilegales sean comparativamente más atractivos que los retornos de las alternativas legales<sup>4</sup>. Desde un punto de vista sociológico, la teoría de la privación relativa sugiere que la desigualdad engendra frustración y enajenación en las personas desposeídas a través de percepciones de desventaja, falta de oportunidades e injusticia que, en conjunto, estimulan las conductas violentas<sup>5</sup>. Los contornos de la conducta criminal son moldeados por aspectos contextuales relativos a la eficacia y la fiabilidad de las redes de control social y los sistemas punitivos<sup>6</sup>. La conducta criminal también puede verse afectada por los cambios de comportamiento de las víctimas potenciales en respuesta a la delincuencia mediante una mayor dependencia sobre la seguridad privada<sup>7</sup>. Las víctimas potenciales pueden también modificar sus decisiones de consumo<sup>8</sup>. En el pasado, el PNUD diagnosticó los crecientes niveles de violencia e inseguridad en ALC como producto de la ausencia de un crecimiento inclusivo y el estancamiento de la movilidad social, que desencadenaron desigualdades persistentes, precariedad laboral y expansiones en las expectativas

<sup>1</sup> Chioda (2017).

<sup>2</sup> PNUD (2013); la OMS define las tasas de homicidio epidémicas como aquellas que sobrepasan los 10 homicidios por cada 100.000 habitantes.

<sup>3</sup> PNUD (2009), (2012), (2013).

<sup>4</sup> Becker (1968); Ehrlich (1973).

<sup>5</sup> Merton (1938).

<sup>6</sup> Shaw y McKay (1942); Kornhauser (1978); Kelly (2000).

<sup>7</sup> Di Tella, Galiani y Schargrodsky (2010); Amodio (2019).

<sup>8</sup> Mejía y Restrepo (2016); Galiani, Jaitman y Weinschelbaum (2020).

de consumo<sup>9</sup>. Entretanto, la ciencia política ha debatido reiteradamente sobre si la desigualdad es o no un factor determinante de la violencia política, especialmente la guerra civil. Aunque varios estudios no han encontrado una relación sistemática entre ambas, otros sostienen que tanto la desigualdad política como la económica contribuyen al estallido y la continuación de una guerra civil<sup>10</sup>.

Sin embargo, la violencia y la victimización por delitos podrían, a su vez, reproducir la desigualdad al ampliar las brechas en diferentes ámbitos del desarrollo. Este efecto direccional, aunque pocas veces estudiado por la academia, parece plausible si se reconoce que la violencia suele ser experimentada de forma desproporcionada por poblaciones que ya enfrentan adversidades socioeconómicas, amplificando o perpetuando así su estado de privación<sup>11</sup>. El efecto de la violencia es multidimensional, ya que puede llevar al deterioro de los derechos y libertades, empeorar la salud física y mental, reducir el desempeño académico y la participación laboral, y disminuir la participación política de las víctimas. La violencia también puede fracturar el capital social, amenazar las instituciones democráticas a nivel local y nacional, y obstruir la provisión de bienes públicos para las comunidades victimizadas. Por ende, la violencia puede ser tanto consecuencia como causa de la desigualdad<sup>12</sup>.

La violencia está vinculada no solo a la desigualdad, sino también al crecimiento. A nivel macroeconómico, el crimen y la violencia pueden reducir y distorsionar la inversión, afectar la formación de capital humano y por ende la productividad, y conducir al agotamiento del capital físico y natural<sup>13</sup>. Algunos cálculos recientes fijan el costo promedio del homicidio en los países de ALC en cerca de 4,1 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional<sup>14</sup>. Los costos directos e indirectos del crimen en ALC se calculan en un 3 por ciento del PIB en el país promedio y en más del 6 por ciento en los países más violentos de América Central<sup>15</sup>. El Banco Mundial estima que los costos relacionados con los gastos médicos, la pérdida de productividad y el gasto público en seguridad ascienden al 3,7 por ciento de la producción anual<sup>16</sup>. Esto representa un desperdicio sustancial de los recursos públicos que se necesitan para la defensa, la policía, los programas de prevención y el castigo. Los costos macroeconómicos de la violencia se traducen en una mayor desigualdad de ingresos, especialmente si impiden que los países inviertan en políticas que reduzcan la desigualdad o si los más bajos niveles de crecimiento económico derivados de la violencia obligan a los

---

<sup>9</sup> PNUD (2013).

<sup>10</sup> Ver Cederman y Vogt (2017) para un panorama general del debate y los hallazgos recientes.

<sup>11</sup> Arjona (2021).

<sup>12</sup> PNUD (2013); Arjona (2021).

<sup>13</sup> Lederman, Loayza y Menéndez (2002), Soares (2015).

<sup>14</sup> Fearon y Hoeffler (2014).

<sup>15</sup> Jaitman (2017).

<sup>16</sup> Banco Mundial (2004).

gobiernos a abandonar intervenciones institucionales que promuevan el bienestar social. Así pues, la violencia tiene la capacidad de distorsionar la asignación de recursos públicos y privados, contribuyendo de esta forma a la persistencia de la desigualdad.

El resto de este capítulo explora el papel de la violencia como factor subyacente a la alta desigualdad y el bajo crecimiento<sup>17</sup>. Comienza investigando los patrones históricos recientes de crimen y violencia en la región, desglosando la violencia criminal, política, social y doméstica. Luego ofrece una cuidadosa reflexión sobre los canales a través de los cuales la violencia se traduce en desigualdad y perpetúa un círculo vicioso, y examina las rutas por las que la violencia perjudica la productividad y el crecimiento económico. Se discuten esferas de acción que podrían contribuir a disminuir la incidencia de la violencia en la región, conduciendo a su vez a sociedades más igualitarias y productivas.

## 4.2. La región de América Latina y el Caribe es una de las más violentas del mundo

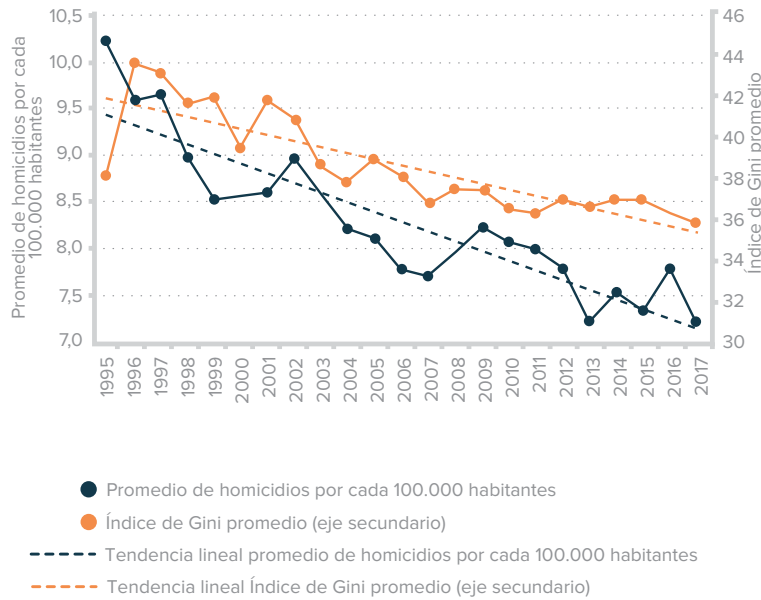
Con el cambio de siglo se ha producido una disminución generalizada de la desigualdad de ingresos y la violencia a nivel mundial (figura 4.1) y en ALC (figura 4.2). No obstante, la región ha conservado su lugar como una de las más desiguales y violentas del mundo. Entre 2000 y 2018, las tasas de homicidio intencional en cada una de las subregiones de ALC superaron significativamente los promedios mundiales<sup>18</sup>. Consistentemente, América Central y América del Sur experimentaron tasas más altas que el Caribe (figura 4.3). Más aún, los países de ALC mostraron tasas de homicidio y de victimización por delitos mucho más altas que otros países con niveles similares de desigualdad (figuras 4.4 y 4.5).

<sup>17</sup> Este capítulo se basa en dos documentos de antecedentes para este IRDH: Arjona (2021) y Schargrodsky y Freira (2021).

<sup>18</sup> Las estadísticas de homicidio intencional incluyen todas las muertes causadas por violencia interpersonal, criminal o sociopolítica, excluidas las muertes por disturbios civiles, asesinatos en defensa propia, asesinatos en intervenciones judiciales y muertes no intencionales.

**Figura 4.1. En el mundo, tanto la tasa de homicidio como la desigualdad de ingresos han disminuido**

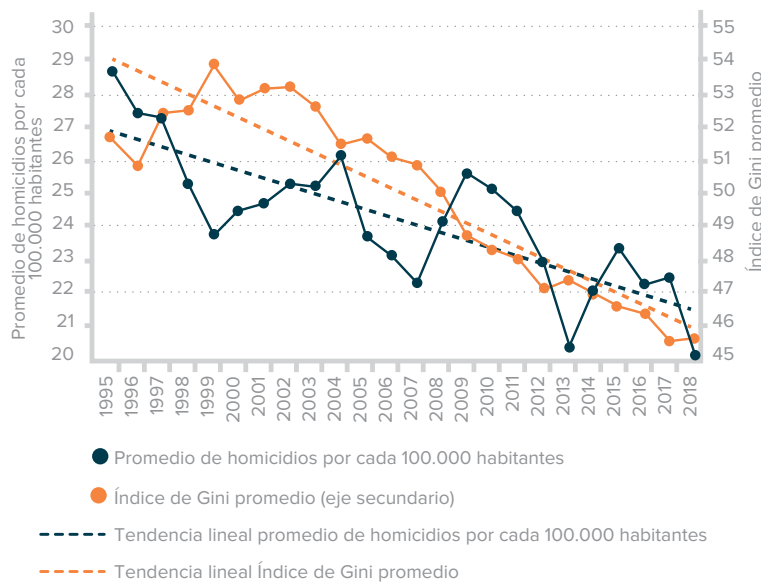
*Tasa de homicidio y desigualdad de ingresos (Gini), mundo, 1995-2017*



Fuente: Schargrodsky y Freira 2021, Documento de Antecedentes para el IRDH 2021 de PNUD ALC; IDM (Indicadores del Desarrollo Mundial) (tablero de indicadores), Banco Mundial, Washington, DC, <https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/>.  
 Nota: los promedios se calculan utilizando la muestra de países disponibles para cada año. El número total de países es de 106: África (21), ALC (21), América del Norte (2), Asia (24), Europa Occidental (16), Europa Oriental (21) y Oceanía (1).

**Figura 4.2. En ALC, tanto la tasa de homicidio como la desigualdad de ingresos han disminuido**

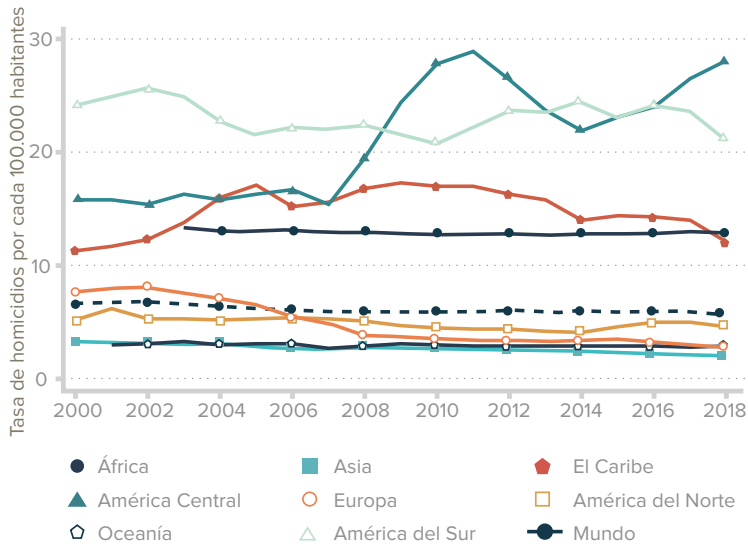
*Tasa de homicidio y desigualdad de ingresos (Gini), ALC, 1995-2018*



Fuente: Elaboración del PNUD; IDM (Indicadores del Desarrollo mundial) (tablero de indicadores), Banco Mundial, Washington, DC, <https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/>.  
 Nota: los promedios se calculan utilizando la muestra de países disponibles para cada año. No todos los países están disponibles para todos los años. La muestra incluye 21 países de ALC.

**Figura 4.3. Las tasas de homicidio en las subregiones de ALC superan significativamente los promedios mundiales**

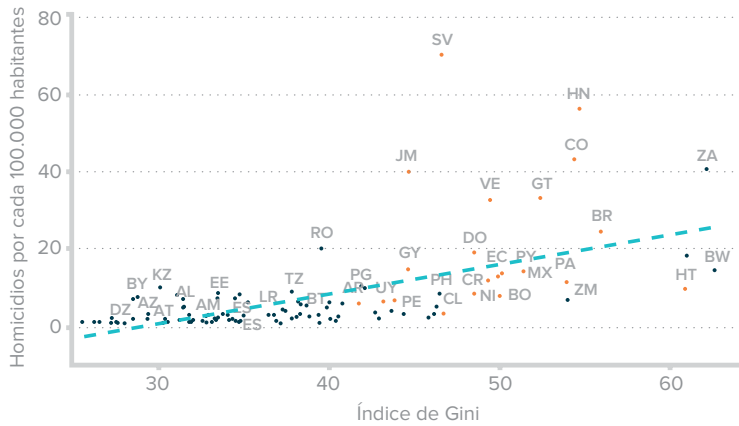
*Tasa de homicidio intencional por cada 100.000 habitantes en las regiones del mundo y en las subregiones de ALC*



Fuente: Arjona 2021, Documento de Antecedentes para el IRDH 2021 de PNUD ALC; datos del Estudio mundial sobre el homicidio 2019 (tablero de indicadores), Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Viena, <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/global-study-on-homicide.html>.

**Figura 4.4. Los países de ALC tienen tasas de homicidio más altas que los países con niveles de desigualdad similares**

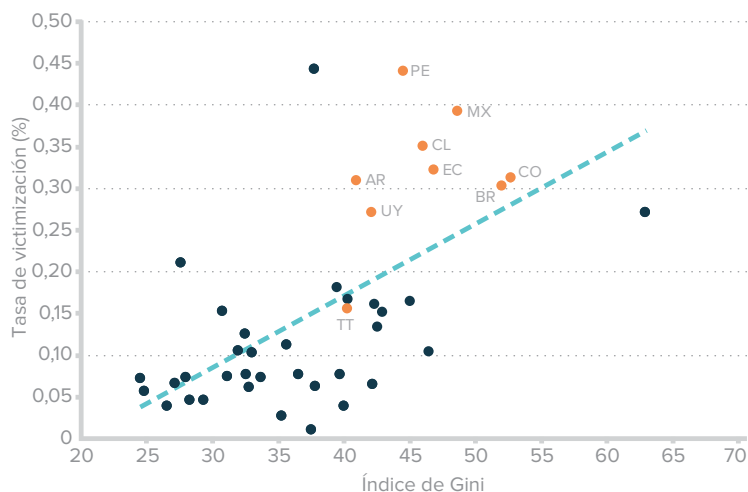
*Tasas de homicidio y desigualdad de ingresos (Gini), mundo, 1995-2017*



Fuente: Schargrodsky y Freira 2021, Documento de Antecedentes para el IRDH 2021 de PNUD ALC; IDM (Indicadores del Desarrollo Mundial) (tablero de indicadores), Banco Mundial, Washington, DC, <https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/>.  
 Nota: los países de ALC están representados por puntos naranjas. Los promedios para cada país se calculan utilizando las observaciones de los años disponibles entre 1995 y 2017. El número total de países es de 106: África (21), ALC (21), América del Norte (2), Asia (24), Europa Occidental (16), Europa Oriental (21) y Oceanía (1).

### Figura 4.5. Los países de ALC tienen tasas de victimización más altas que los países con niveles de desigualdad similares

Tasas de victimización por delitos y desigualdad de ingresos (Gini), mundo, 2010-2014



Fuente: Schargrodsky y Freira 2021, Documento de Antecedentes para el IRDH 2021 de PNUD ALC; IDM (Indicadores del Desarrollo Mundial) (tablero de indicadores), Banco Mundial, Washington, DC, <https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators>; EMV (Encuesta Mundial de Valores) (tablero de indicadores), King's College, Old Aberdeen, Reino Unido, <http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp>.

Nota: los países de ALC están representados por círculos naranjas. La pregunta sobre victimización por delitos se incluyó en la Encuesta Mundial de Valores entre 2010 y 2014, pero solo en un año para cada país. El índice de Gini corresponde al año en que se disponía de la tasa de victimización o al más cercano disponible. El número total de países es de 42: África (7), ALC (9), América del Norte (1), Asia (12), Europa Occidental (3) y Europa Oriental (10).

Sin embargo, los homicidios y otras formas de victimización por delitos son solo dos de las numerosas formas en que la violencia se manifiesta en la región. Arjona (2021) propone una tipología de la violencia basada en tres categorías: la violencia criminal, es decir, la violencia interpersonal o colectiva vinculada con actividades criminales; la violencia política, es decir, la violencia interpersonal o colectiva que se produce en relación con las agendas sociopolíticas; y la violencia social y doméstica, es decir, la violencia interpersonal u ocasionalmente colectiva vinculada a conflictos entre personas que no viven en el mismo hogar (social) o personas que viven en el mismo hogar (doméstica).

La extensa influencia del crimen organizado, alimentado por el narcotráfico, sobre el entorno económico y sociopolítico de la región ha llevado a que varias manifestaciones de violencia criminal sean comunes en ALC, incluyendo la trata de personas, la explotación ilícita de recursos naturales, las amenazas a ecosistemas de gran valor ecológico, los desplazamientos forzados, la gobernanza criminal, los robos, las agresiones físicas, las extorsiones y los secuestros. La violencia política también es prominente. Aunque muchas formas de política contenciosa violenta y represión estatal han disminuido en la región, algunas formas de violencia política han aumentado, como los abusos por parte de fuerzas de seguridad pública militarizadas y la persecución y el asesinato de políticos, periodistas, defensores de los derechos humanos y líderes ambientales y cívicos. Por ejemplo, las cifras de las Naciones Unidas indican que a nivel mundial el

75 por ciento de los asesinatos de defensores de los derechos humanos entre 2015 y 2019 tuvieron lugar en ALC<sup>19</sup>. En cuanto a la violencia social y doméstica, la región se enfrenta actualmente a elevados niveles de violencia sexual, feminicidio y violencia contra niños. La región tiene la tercera prevalencia más alta de violencia sexual a lo largo de la vida perpetrada por personas que no son la pareja y la segunda prevalencia más alta de violencia a lo largo de la vida cometida por la pareja. La violencia contra minorías sexuales es también una de las más altas en el mundo<sup>20</sup>.

La medición de la violencia entraña múltiples dificultades. A menudo, los actos violentos, incluso los más graves como las violaciones, no se denuncian. Incluso los homicidios, que tienen mayor probabilidad de figurar en los datos oficiales, son difíciles de medir porque la definición jurídica de homicidio intencional, al igual que la capacidad de los Estados para recolectar y difundir información sobre homicidios de manera sistemática, varía de un país a otro. No es inusual que distintos organismos dentro de un mismo país reporten cifras diferentes de homicidios. Las dificultades para medir otras formas de violencia son aún mayores, ya que dependen de que la ciudadanía denuncie los actos violentos o los mencione en las encuestas. Si bien algunas iniciativas recientes han fortalecido los sistemas de recolección de información en la región (recuadro 4.1), la fiabilidad estadística y la comparabilidad entre países son generalmente inadecuadas. Este informe reconoce estas limitaciones. No pretende cuantificar con precisión los diferentes fenómenos violentos que afligen a la región. En cambio, basándose en datos, informes nacionales y estudios comparativos, procura describir las principales tendencias de las diferentes formas de violencia en ALC.

<sup>19</sup> CDH (2020).

<sup>20</sup> Ibid; CIDH (2015); SinViolencia LGBTI (2019).

### **Recuadro 4.1. Infosegura: la innovación al servicio de la seguridad ciudadana**

Las nuevas tecnologías facilitan la producción y difusión de información a mayor velocidad. Sin embargo, los datos por sí solos no garantizan los cambios sociales o culturales necesarios para avanzar hacia el desarrollo sostenible. El Proyecto Regional Infosegura, inaugurado por el PNUD en 2014 con el apoyo



de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), tiene como objetivo fortalecer la capacidad institucional para la gestión de la información y promover políticas integrales en materia de seguridad ciudadana, que tengan en cuenta las cuestiones de género y los derechos humanos en América Central y República Dominicana, a través de la innovación.

Infosegura ayuda a las instituciones nacionales y a las oficinas de país del PNUD a ampliar su visión sobre la gestión de la información, centrándose en el desarrollo de herramientas y la producción de conocimientos para que sirvan como base a las políticas de prevención de la violencia, promoción de la seguridad ciudadana y cohesión social. Esto supone utilizar un complejo enfoque multidimensional alineado con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La iniciativa ha mejorado la capacidad de las instituciones participantes de generar información con nuevas herramientas automatizadas y ecosistemas de datos integrados. Alienta el análisis a mayores niveles de desagregación, territorialización y georreferenciación. Todo esto ayuda a llegar a los grupos demográficos y las zonas geográficas más vulnerables con intervenciones focalizadas para que nadie se quede atrás.

Para establecer una mayor transparencia e integración, la iniciativa también alienta a las instituciones a avanzar hacia una política de datos abiertos en materia de seguridad ciudadana, crear alianzas para el intercambio de información y producir, analizar y difundir información, antes restringida a los organismos de seguridad de los países, entre diferentes instituciones estatales o locales. Esto ha permitido un mejor uso de la evidencia en el diseño y seguimiento de políticas públicas. También ha permitido una mejor comprensión del entorno inmediato de las comunidades vulnerables expuestas a la violencia y la inseguridad. Esto ha ocurrido mediante una metodología de priorización y selección territorial que ya ha sido incorporada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador y el Ministerio de Gobernación de Guatemala. En los municipios hondureños, ha apoyado a la gobernanza local facilitando la creación de observatorios de violencia y ayudando a diseñar estrategias para encarar la inseguridad y promover la convivencia.

Infosegura está comprometido con la integración de una comunidad de conocimiento regional sobre seguridad ciudadana, mediante el respaldo a las redes de conocimiento nacionales y regionales y a través de la producción de una plataforma digital (Datacción). El propósito es estimular el trabajo multisectorial regional en materia de gestión de la información sobre seguridad ciudadana, mostrar los esfuerzos de las oficinas de país del PNUD y de las instituciones gubernamentales, y facilitar la transferencia y escalamiento de mejores prácticas y propuestas de innovación. Asimismo, Infosegura ha contribuido a fortalecer las capacidades técnicas de las fuentes de información, sus técnicas de gestión de la información, y su manejo de herramientas para el diseño y medición de indicadores sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular

el ODS 16. Además de mejores datos sobre muertes violentas, feminicidios y violencia sexual, se ha suministrado apoyo para la armonización de encuestas, el mapeo de los agentes nacionales que producen información y los marcos de seguimiento orientados a la Agenda de Desarrollo Sostenible.

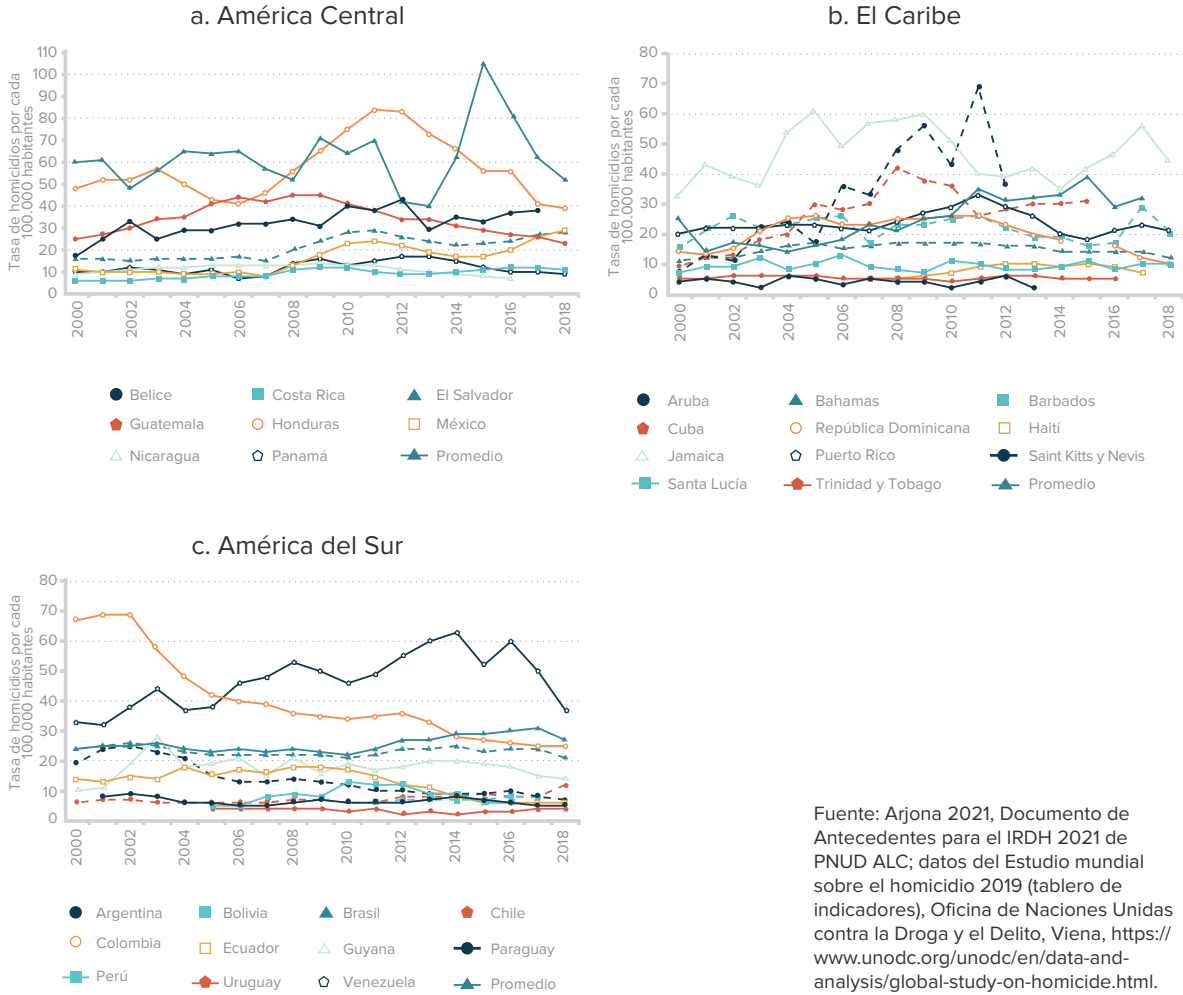
Fuente: Infosegura, Unidad de coordinación regional del proyecto Infosegura, Bureau Regional para América Latina y el Caribe, y Centro Regional para América Latina y el Caribe, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Panamá, <https://infosegura.org/>.

### Patrones de la violencia criminal

Durante el siglo XX, la historia de ALC estuvo profundamente permeada por la violencia de carácter predominantemente político, debido a las perturbaciones derivadas de los vestigios de las luchas por la independencia, la severa represión estatal de los derechos civiles, y los conflictos civiles internos agravados por la creciente fuerza de las insurgencias y las milicias paraestatales. Solo después de la ola de democratización de la década de 1980 y la posterior aparición del crimen organizado y el crecimiento del narcotráfico durante la de 1990, los patrones de violencia en la región pasaron de estar asociados con motivaciones políticas a motivaciones criminales, las cuales explican actualmente la mayoría de los homicidios. Sin embargo, a pesar de esta historia común de violencia, hay una importante heterogeneidad intrarregional y subnacional. No todos los crímenes ni la violencia son iguales, y los países de la región difieren enormemente en los tipos y la intensidad de crímenes y violencia que enfrentan. Las tendencias a nivel subregional para el presente siglo indican que las tasas de homicidio intencional en algunos países son el doble, el triple y hasta trece veces más altas que las tasas en otros países de la misma subregión (figura 4.6). Las tasas más elevadas en América Central para este período se observan en El Salvador, Honduras y Guatemala, mientras que Jamaica, Saint Kitts y Nevis, y las Bahamas muestran las tasas más altas en el Caribe. En América del Sur, Brasil, Colombia, y Venezuela tuvieron tasas significativamente más altas que el resto de los países en la subregión. En general, las tasas promedio de homicidio intencional en ALC entre 2000 y 2018 muestran enormes variaciones entre los países (figura 4.7).

**Figura 4.6. Las tasas de homicidio en algunos países triplican o son incluso trece veces más altas que en otras partes de la misma subregión**

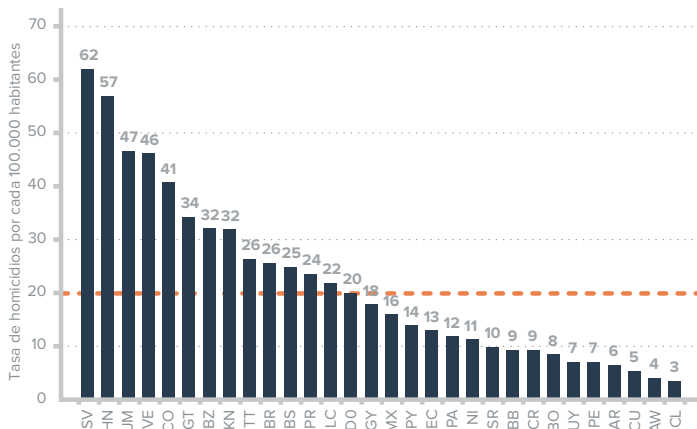
Tasas de homicidio intencional en las subregiones de ALC, 2000-2018



Fuente: Arjona 2021, Documento de Antecedentes para el IRDH 2021 de PNUD ALC; datos del Estudio mundial sobre el homicidio 2019 (tablero de indicadores), Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Viena, <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/global-study-on-homicide.html>.

**Figura 4.7. Existe una enorme variación en las tasas de homicidio entre los países de ALC**

Tasa promedio de homicidio intencional en ALC, 2000-2018



Fuente: Arjona 2021, Documento de Antecedentes para el IRDH 2021 de PNUD ALC; datos del Estudio mundial sobre el homicidio 2019 (tablero de indicadores), Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Viena, <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/global-study-on-homicide.html>. Nota: el promedio de ALC está representado por la línea naranja punteada.

La violencia homicida en la región también varía mucho al interior de los países. Por ejemplo, algunos estados y ciudades de México tienen tasas de homicidio superiores a 200 por cada 100.000 habitantes, mientras que otros tienen tasas inferiores a 2, y algunas regiones de Chile registran 3 homicidios por cada 100.000 habitantes mientras que otras tienen de una tasa de 0,5<sup>21</sup>. La violencia puede incluso concentrarse en unas pocas localidades, como es el caso de El Salvador, donde cerca del 5 por ciento de los municipios concentraron casi la mitad de los homicidios en 2013, y Brasil, donde la violencia en ciudades como Belo Horizonte tiene lugar principalmente en 6 de los 81 distritos<sup>22</sup>. Incluso hay una gran variación dentro de las ciudades. Por ejemplo, en Río de Janeiro, el 50 por ciento de los homicidios en 2016 ocurrieron en solo el 1,1 por ciento del espacio urbano<sup>23</sup>.

Los crímenes mortales en las naciones menos violentas, como Argentina, Bolivia, Perú y Uruguay, son principalmente el resultado de la violencia doméstica y de actos de delincuencia común<sup>24</sup>. Sin embargo, los homicidios en los países más violentos están típicamente vinculados con el narcotráfico y otras economías ilícitas<sup>25</sup>. Esta violencia suele estar asociada a la competencia entre grupos de crimen organizado, su enfrentamiento con las fuerzas estatales y los conflictos al interior de las mismas organizaciones criminales<sup>26</sup>. Aunque hay variaciones temporales en los niveles de violencia criminal dentro de los países y entre ellos, en las últimas dos décadas el crimen organizado en la región se ha vuelto cada vez más violento. Debido a la inestabilidad y la subsiguiente escisión de las organizaciones narcotraficantes mexicanas y sus enfrentamientos entre sí y con las autoridades estatales tras los cambios en el entorno político, la tasa de homicidio del país se triplicó en diez años<sup>27</sup>. Al mismo tiempo, el enfoque internacional de reprimir las redes de narcotráfico colombianas y mexicanas empujó al crimen organizado a expandirse hacia América Central para establecer nuevas rutas para sus operaciones de tráfico. Se estima que los grupos criminales encargados de coordinar el narcotráfico en esta subregión estuvieron involucrados en cerca del 26 por ciento de todos los homicidios ocurridos en América Latina en 2011<sup>28</sup>. El crimen organizado ha convertido a América Central en la subregión más violenta del mundo en términos per cápita. El Salvador, Honduras y Guatemala lideran de esta tendencia.

---

<sup>21</sup> Muggah y Tobón (2018).

<sup>22</sup> PNUD (2013); Jaitman (2017).

<sup>23</sup> Chainey y Muggah (2020).

<sup>24</sup> Lagos y Dammert (2012).

<sup>25</sup> Yashar (2018).

<sup>26</sup> Reuter (2009); Yashar (2018).

<sup>27</sup> Lessing (2018).

<sup>28</sup> Secretaría de la Declaración de Ginebra (2011).

Por su parte, Colombia, Brasil y Venezuela son los países más afectados por la violencia criminal en América del Sur. El uso de los beneficios del narcotráfico por parte de la guerrilla y los grupos paramilitares en Colombia para financiar sus operaciones ha hecho que la violencia política y la criminal estén estrechamente relacionadas. Los esfuerzos transicionales no han tenido éxito a la hora de dismantelar las disidencias de ambas facciones que siguen ejerciendo su influencia en zonas vulnerables. En Brasil, la tasa de homicidio ha oscilado entre 25 y 30 por cada 100.000 habitantes entre 1990 y 2019, pero hay una gran variación subnacional. Los homicidios en los estados del noreste y el centro-oeste del país han aumentado desde el año 2000, mientras que los estados del sureste se han vuelto menos violentos; además, los municipios más poblados han visto las tasas de homicidio estabilizarse o disminuir recientemente, mientras que los municipios más pequeños se han vuelto cada vez más violentos<sup>29</sup>. Venezuela registró un aumento de la tasa de homicidio desde 13 por cada 100.000 habitantes en 1991 a 60 en 2019.

El impacto del narcotráfico en el Caribe, que había dejado de ser importante tras el auge de la cocaína durante la década de 1980, ha recuperado su influencia desde mediados de la década de 2000<sup>30</sup>. En la actualidad, no solo ha convertido a República Dominicana y Jamaica en rutas de tráfico clave hacia América del Norte y Europa, sino que también ha aumentado los niveles de violencia y corrupción así como la capacidad coercitiva de los grupos criminales<sup>31</sup>. Todos los países de la subregión, a excepción de Barbados y Surinam, experimentaron un aumento de las tasas de homicidio y de los asesinatos relacionados con el crimen organizado durante la década de 2000<sup>32</sup>.

La violencia criminal en ALC también se ha caracterizado por la prevalencia del desplazamiento forzado, que afectó a unos 265.000 guatemaltecos, hondureños y salvadoreños entre 2013 y 2018<sup>33</sup>. El desplazamiento forzado también ha afectado a miles de mexicanos y, como resultado de la violencia tanto criminal como política, a más de 8 millones de colombianos<sup>34</sup>. Los robos y las agresiones físicas también son generalizados, lo que convierte a ALC en la región del mundo con el mayor nivel de agresiones físicas y robos violentos denunciados, según las estadísticas de crimen de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). La encuesta del Barómetro de las Américas encontró que, entre 2010 y 2014, un promedio de una de cada cinco personas encuestadas en la región afirmó haber sido víctima de

---

<sup>29</sup> Nsoesie *et al.* (2020).

<sup>30</sup> UNODC (2012).

<sup>31</sup> PNUD (2012).

<sup>32</sup> PNUD (2012).

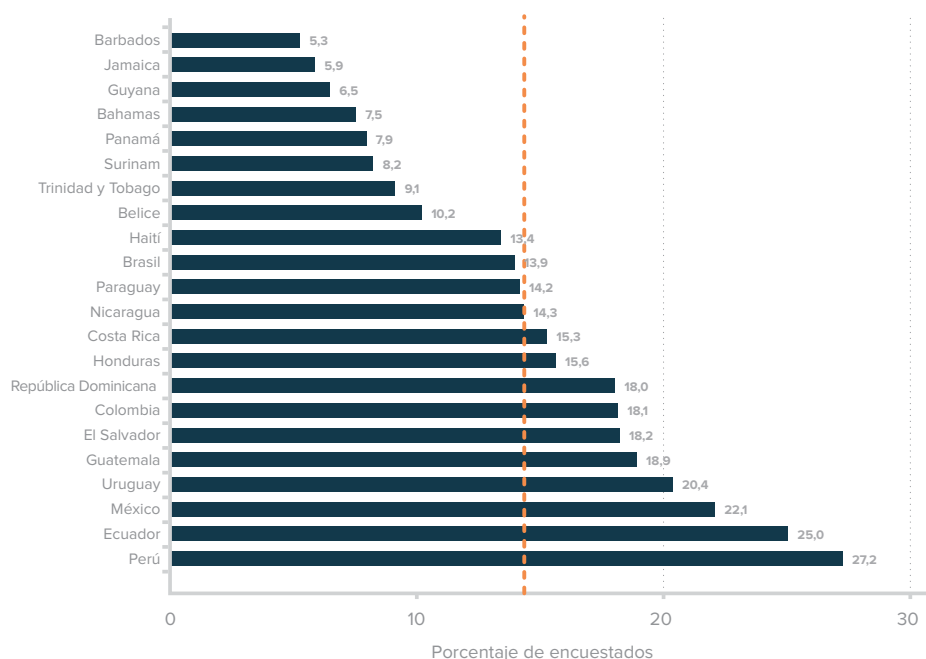
<sup>33</sup> CRS (2019).

<sup>34</sup> Ríos Contreras (2014); ACNUR (2018).

un robo en los doce meses anteriores<sup>35</sup>. El porcentaje promedio de encuestados que afirman haber sido víctimas de un delito en los doce meses anteriores varió mucho entre países entre 2010 y 2014 (figura 4.8). Las tasas respectivas de Ecuador, México, Perú y Uruguay superan el 20 por ciento; las de Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana se sitúan entre el 10 y el 20 por ciento; y las de las Bahamas, Barbados, Guyana, Jamaica, Surinam y Trinidad y Tobago son todas inferiores al 10 por ciento.

**Figura 4.8. Más de uno de cada diez ciudadanos de ALC ha sido víctima de un delito en los doce meses anteriores**

*Encuestados que afirman haber sido víctimas de un delito en doce meses anteriores, % promedio, 2010-2014*



Fuente: Arjona 2021, Documento de Antecedentes para el IRDH 2021 de PNUD ALC; datos del Barómetro de las Américas (tablero de indicadores), Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), Universidad de Vanderbilt, Nashville, Tennessee, <https://www.vanderbilt.edu/lapop/core-surveys.php>.

Nota: el promedio de ALC está representado por la línea naranja punteada.

En los países más violentos de la región, la extorsión y el secuestro también han sido una modalidad generalizada de violencia criminal. Las guerrillas, los paramilitares y los grupos criminales colombianos han recurrido a ambos, aunque los secuestros han disminuido sustancialmente desde principios de la década del 2000<sup>36</sup>. Las pandillas

<sup>35</sup> Ver el Barómetro de las Américas (tablero de indicadores), Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), Universidad de Vanderbilt, Nashville, TN, <https://www.vanderbilt.edu/lapop/core-surveys.php>.

<sup>36</sup> Ver el Observatorio de Memoria y Conflicto (tablero de indicadores), Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, Bogotá, Colombia, <http://micrositios.centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/>.

de El Salvador, Guatemala y Honduras dependen de la extorsión como una de sus principales fuentes de ingresos<sup>37</sup>. Es habitual que las organizaciones narcotraficantes de México lleven a cabo extorsiones y secuestros en sus zonas de influencia<sup>38</sup>. Los grupos criminales también han obtenido abundantes beneficios de la minería ilegal, especialmente en relación con la extracción de oro. Estas operaciones mineras, que representan el 28 por ciento de todo el oro extraído en Perú, el 30 por ciento en Bolivia, el 77 por ciento en Ecuador, el 80 por ciento en Colombia y entre el 80 y el 90 por ciento en Venezuela, están asociadas a la explotación laboral y a la trata de personas, así como a una drástica degradación del medio ambiente y a la contaminación de los recursos hídricos (recuadro 4.2)<sup>39</sup>.

<sup>37</sup> International Crisis Group (2017).

<sup>38</sup> Magaloni *et al.* (2020).

<sup>39</sup> Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (2016).

### **Recuadro 4.2. La minería ilegal no regulada es una fuente de conflictos ambientales y destrucción en ALC**

Las operaciones mineras ilegales son rampantes en ALC, y las condiciones regulatorias y las normas ambientales y sanitarias en operaciones que sí cuentan con concesiones o permisos legales a menudo no se acatan. Debido al carácter extractivo de la minería, sus abundantes beneficios económicos a menudo se distribuyen de forma desigual entre las comunidades locales o se desvían hacia corporaciones, autoridades estatales corruptas o grupos criminales organizados<sup>a</sup>. Los daños permanentes ocasionados a los recursos naturales y los ecosistemas perjudican predominantemente a los medios de subsistencia locales. Por ello, los proyectos mineros en la región se han topado repetidamente con la resistencia o el malestar de las comunidades locales<sup>b</sup>. Más aún, los derechos territoriales, políticos y económicos a nivel local a menudo se pasan por alto en el contexto de las grandes actividades extractivas, y las exigencias planteadas por las comunidades en contra de estas violaciones han sido ignoradas o correspondidas con persecución violenta en algunos casos<sup>c</sup>.

En ALC, la extracción de oro artesanal y en pequeña escala carece en gran medida de regulación y se sigue practicando con técnicas tradicionales que tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente. En Surinam, el país con

mayor densidad forestal del mundo, la extracción de oro es la principal causa de la deforestación. Entre 2000 y 2015 fue responsable del 73 por ciento de la tala de bosques, y dio lugar a emisiones de gases con efecto invernadero de cerca de 55,05 millones de toneladas de dióxido de carbono<sup>d</sup>. Además, este tipo de minería del oro provoca la degradación del suelo y la erosión y sedimentación de las corrientes de agua. Sin restauración y rehabilitación adecuadas, las zonas afectadas se degradan hasta convertirse en suelo árido, hierba y agua estancada, lo que disminuye irreversiblemente la biodiversidad, las reservas de carbono y los bienes y servicios ambientales que proveen los ecosistemas. Las pérdidas de biodiversidad derivadas de este tipo de minería están especialmente asociadas al declive de las especies de peces.

La extracción de oro artesanal y en pequeña escala es también la principal fuente de liberación antropogénica de mercurio al medio ambiente; representó aproximadamente el 37 por ciento de las emisiones mundiales de mercurio en 2018<sup>e</sup>. ALC es el principal contribuyente a las emisiones de mercurio derivadas de la extracción de oro artesanal y en pequeña escala, responsable de alrededor del 42 por ciento de las emisiones totales asociadas con esta actividad. Por medio de la ratificación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, los países de la región se han comprometido a eliminar progresivamente el uso del mercurio<sup>f</sup>. Algunos incluso han prohibido su uso. Sin embargo, los mineros siguen careciendo de las herramientas y los conocimientos necesarios para trabajar sin mercurio, por lo que ha surgido un mercado negro del metal que empuja a la ilegalidad a muchos mineros en condiciones laborales predominantemente informales y los deja en la difícil disyuntiva de garantizar sus medios de vida o preservar su salud y la de los ecosistemas.

<sup>a</sup> Loayza y Rigolini (2016).

<sup>b</sup> Schröder *et al.* (2020).

<sup>c</sup> GRISUL (2018).

<sup>d</sup> NIMOS, SBB y UNIQUE (2017).

<sup>e</sup> AMAP y PNUMA (2019).

<sup>f</sup> BCCC, SCRC y PNUMA (2014).

La región también ha sido testigo de violencia contra grupos indígenas. Esta violencia está asociada con actores estatales y privados interesados en controlar activos de capital natural de valor estratégico tales como tierras forestales para transformarlas en tierras agrícolas sujetas a la especulación, y recursos minerales, fósiles e hídricos. El auge de las materias primas durante la década del 2000, que se tradujo en los altos precios de muchos metales, elevó la demanda y la presión sobre las actividades extractivas, aumentando a su vez la frecuencia de la violencia asociada a la lucha



por estos recursos. Las tensiones entre las comunidades locales que protegían sus derechos sobre la tierra y las industrias extractivas que buscaban controlar valiosos activos aumentaron, desencadenando nuevas violencias en muchos países de la región<sup>40</sup>.

### Patrones de la violencia política

La violencia estatal y los actos violentos de la política contenciosa en la región han disminuido durante el siglo XXI. La movilización social ha sido, en general, pacífica. Solo el 23 por ciento del promedio de 39 protestas anuales entre 2000 y 2012 fueron violentas<sup>41</sup>. Desde 2013, se ha producido un ligero aumento tanto del número de protestas como de la proporción de estas que son violentas, pero las cifras varían mucho entre subregiones y al interior de ellas (figura 4.9). Entre 2000 y 2019, las protestas violentas en América del Sur fueron más comunes en Bolivia, Brasil y Venezuela. México fue el escenario de un número substancial de protestas violentas, y la mayoría de las protestas violentas en América Central se produjeron en Honduras y Nicaragua. Según los escasos datos disponibles sobre protestas en el Caribe, Haití y Jamaica tuvieron el mayor número de protestas violentas en la subregión. Otra forma de violencia relacionada con este fenómeno, que se hizo especialmente evidente durante la serie de protestas generalizadas en toda la región en 2019, fue el uso excesivo de la fuerza y las declaraciones de emergencia, que suspendieron derechos y libertades básicas, con las que varios Estados respondieron a dichas manifestaciones, y que fueron responsables de más de 200 muertes<sup>42</sup>.

Incluso después de que se produjeran reformas estructurales en las fuerzas policiales como parte de la transición a la democracia, la brutalidad y los abusos policiales siguen siendo un problema importante en la región. Son especialmente críticos en Argentina, Bolivia, Colombia y El Salvador, donde afectan sobre todo a los hombres, a los jóvenes y a los residentes de las grandes ciudades<sup>43</sup>. En Venezuela, la tasa de civiles asesinados por las fuerzas gubernamentales aumentó de 2,3 por cada 100.000 habitantes en 2010 a 19,0 en 2016, y hasta el 22 por ciento de todas las muertes violentas en el país en 2016 fueron cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado<sup>44</sup>. En El Salvador en 2016, la tasa equivalente fue de 9,5 por cada 100.000, y alrededor del 11 por ciento de todos los homicidios fueron perpetrados por fuerzas estatales<sup>45</sup>. La tasa de homicidios cometidos por entes estatales de Brasil es menor,

<sup>40</sup> Rasch (2017); Martínez-Alier (2021).

<sup>41</sup> Clark y Regan (2016).

<sup>42</sup> Amnistía Internacional (2019).

<sup>43</sup> Cruz (2009).

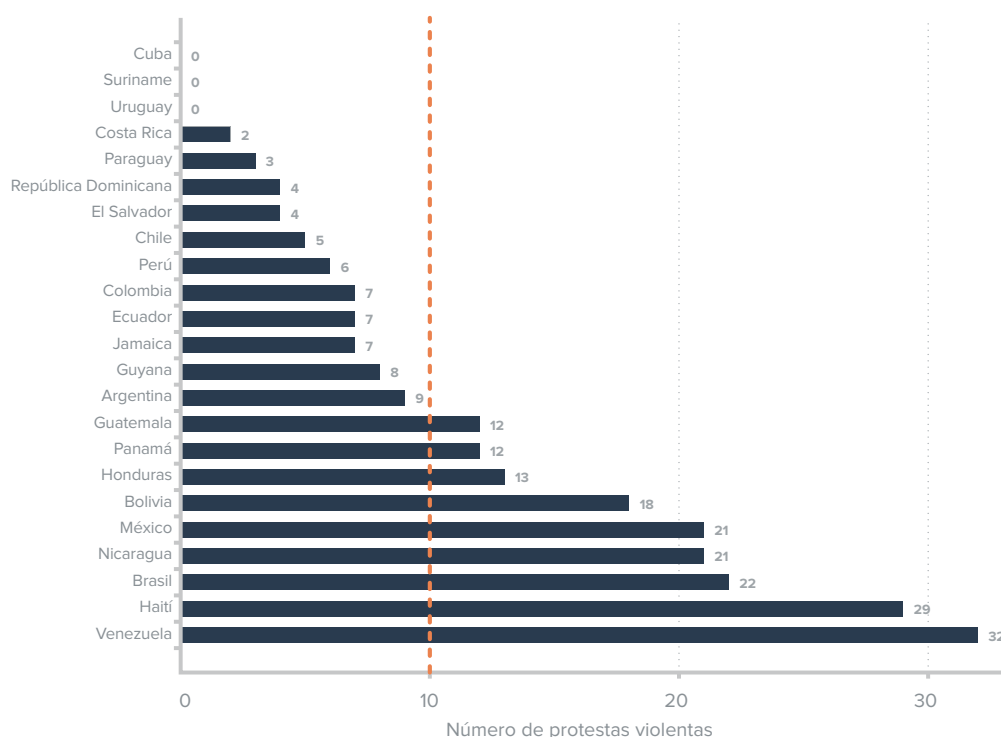
<sup>44</sup> Ávila (2018); Fernández-Shaw (2019).

<sup>45</sup> Bergmann *et al.* (2019).

cerca de 2,0, pero el número de personas asesinadas por la policía en la última década ha ascendido a 33.000<sup>46</sup>. En Colombia, la tasa de civiles asesinados por las fuerzas estatales es inferior a 1,0 pero las ejecuciones extrajudiciales son habituales, con más de 3.800 personas asesinadas por el ejército para presentarlas como miembros de grupos armados ilegales<sup>47</sup>. Las agresiones llevadas a cabo por las fuerzas armadas también se han intensificado tras la decisión de algunos países de militarizar las tareas de seguridad pública, lo que ha provocado un aumento de la violencia en Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela<sup>48</sup>.

**Figura 4.9. Las manifestaciones han sido generalmente pacíficas, pero las protestas violentas son un problema en varios países**

*Número de protestas violentas en países de ALC, 2000-2019*



Fuente: Arjona 2021, Documento de Antecedentes para el IRDH 2021 de PNUD ALC; datos de Clark y Regan (2016), Datos sobre Movilización Masiva y Protesta (tablero de indicadores), versión 5.0, Biblioteca de la Universidad de Harvard, Universidad de Harvard, Cambridge, MA, <https://dataverse.harvard.edu/dataverse/MMdata>.

Nota: el promedio de ALC está representado por la línea naranja punteada.

<sup>46</sup> Marques *et al.* (2019); Muñoz Acebes (2020).

<sup>47</sup> Castillo Muñoz, Suárez Rueda y Acero Velásquez (2019); Legrand (2020).

<sup>48</sup> Diamint (2015), Flores-Macias y Zarkin (2019).

La violencia política en ALC también ha tenido graves consecuencias para quienes han sido señalados y asesinados sistemáticamente por sus convicciones, opiniones y actividades políticas. Entre ellos se encuentran defensores de los derechos humanos, líderes sociales, activistas medioambientales, políticos y periodistas. La mayoría de los casos de defensores de los derechos humanos asesinados se han producido en Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras y México<sup>49</sup>. Los conflictos por cuestiones ambientales se han vuelto especialmente violentos en Brasil, Guatemala y Honduras<sup>50</sup>. Cientos de políticos mexicanos han sido asesinados por organizaciones narcotraficantes<sup>51</sup>. Alrededor de 2.000 políticos locales en Colombia fueron asesinados entre 1980 y 2015<sup>52</sup>. Se estima que 450 periodistas fueron asesinados o desaparecidos en la región entre 2000 y 2017; Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras y México son los países más peligrosos para esa profesión<sup>53</sup>.

### Patrones de la violencia social y doméstica

Además de los problemas críticos a los que se enfrenta ALC respecto de la violencia criminal y política, la región también lucha contra la violencia social y doméstica (recuadro 4.3). Alrededor de un tercio de las mujeres de la región que han estado alguna vez en una relación sentimental han sido agredidas física o sexualmente por una pareja íntima al menos una vez a lo largo de su vida, y más del 10 por ciento de las mujeres mayores de 14 años han sido forzadas a mantener relaciones sexuales por alguien que no es su pareja<sup>54</sup>.

Sin embargo, hay una gran variación entre los países. Los datos sobre la violencia de pareja contra las mujeres durante el último año disponible entre 2003 y 2017 muestran que Ecuador tuvo la tasa más alta (40,4 por ciento), seguido de Costa Rica (35,9 por ciento) y Trinidad y Tobago (30,2 por ciento) (figura 4.10). Todas las demás tasas se situaron entre el 20 por ciento y el 30 por ciento, excepto las de Brasil y Uruguay, que fueron las más bajas: el 16,7 por ciento y el 16,8 por ciento, respectivamente. El porcentaje de mujeres que han sufrido abusos físicos o sexuales por su pareja actual o más reciente también varía ampliamente entre los países (figura 4.11). Bolivia presenta la tasa más alta (casi el 60 por ciento), las tasas de Colombia, Ecuador, y Perú se sitúan entre el 30 por ciento y el 35 por ciento, y Uruguay registra una tasa de menos del 10 por ciento.

<sup>49</sup> Front Line (2020).

<sup>50</sup> Temper, del Bene y Martínez-Alier (2015).

<sup>51</sup> Trejo y Ley (2021).

<sup>52</sup> Arjona, Chacón y García (2020).

<sup>53</sup> Díaz Nosty y de Frutos García (2017).

<sup>54</sup> OMS, LSHTM, y SAMRC (2013).

También se registraron diferencias notables en la tasa promedio de feminicidios entre los países de la región entre 2010 y 2019 (figura 4.12). En el Caribe, las mayores tasas de feminicidio por cada 100.000 habitantes correspondieron a República Dominicana (3,1), Trinidad y Tobago (2,3) y Santa Lucía (1,8). En América del Sur, las tasas más altas se encontraron en Bolivia (2,0), Brasil (1,6) y Uruguay (1,5). En América Central, la subregión con las tasas más altas, los países con el mayor número de feminicidios relativo a su población fueron Honduras (7,1) y El Salvador (6,3).

### **Recuadro 4.3. La erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas es un requisito para el desarrollo sostenible**

La violencia contra las mujeres y las niñas es un flagelo contra los derechos humanos, la salud pública, la seguridad ciudadana y la autonomía física, política y económica de las mujeres. En ALC, los niveles de este tipo de violencia son abrumadores. La región tiene la tercera tasa más alta de violencia sexual fuera de la pareja en el mundo, y la tasa de violencia a manos de la pareja o de exparejas es la segunda más alta a nivel global. La manifestación más extrema de esta violencia, el feminicidio, ha alcanzado dimensiones preocupantes: según el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 4.555 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 18 países de ALC en 2018<sup>a</sup>.

Por cuenta de la pandemia de COVID-19, la mayoría de los países viven una crisis socioeconómica como subproducto de la crisis sanitaria, que ha generado mayores brechas de desigualdad, afectando principalmente a niñas, niños, adolescentes y mujeres, los más vulnerables y en situación de riesgo dentro de sus propios hogares. Los datos internacionales muestran que la violencia contra las mujeres y las niñas aumenta en contextos de crisis, conflicto o emergencia. Los datos del Rastreador Global de Respuestas de Género al COVID-19 del PNUD muestran que los gobiernos de la región han puesto la lucha contra este tipo de violencia en el centro de la respuesta política de emergencia: 177 medidas aplicadas en 29 países se centran en prevenir o contrarrestar la violencia contra las mujeres y las niñas, lo que equivale a alrededor del 68 por ciento de todas las acciones sensibles al género<sup>b</sup>.

La eliminación de este tipo de violencia es un factor catalizador para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. No solo es fundamental para el empoderamiento económico de las mujeres, sino también para la reducción de la pobreza, la consolidación de la paz, la cohesión social y el acceso a la justicia. Como se ha demostrado ampliamente en los últimos años, las políticas públicas dirigidas a erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas deben adoptar un enfoque integral que incluya la prevención, la atención, la sanción y la reparación. Este enfoque también debe integrar perspectivas económicas, sociales, culturales y de justicia para enfrentar el problema a lo largo de las diferentes etapas del ciclo de vida de las mujeres.

La iniciativa Spotlight está en el corazón de las reformas al interior de las Naciones Unidas<sup>c</sup>. Encarna una nueva forma de cumplir la Agenda 2030 de manera integral. Se trata de una alianza mundial plurianual entre la Unión Europea y las Naciones Unidas para ayudar a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. El principal objetivo del programa regional de la iniciativa Spotlight para América Latina es prevenir, abordar y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, con foco en el feminicidio. El programa regional de la iniciativa Spotlight para el Caribe se centra principalmente en encarar la violencia doméstica.

---

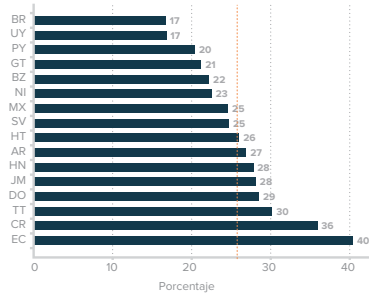
<sup>a</sup> Ver Femicidio o feminicidio (tablero de indicadores), Observatorio de Igualdad de Género para América Latina y el Caribe, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Santiago, Chile, <https://oig.cepal.org/en/indicators/femicide-or-feminicide>.

<sup>b</sup> ONU Mujeres y PNUD (2020); ver el Rastreador Global de Respuestas de Género a COVID-19 (tablero de indicadores), Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Nueva York, <https://data.undp.org/gendertracker/>.

<sup>c</sup> Ver el sitio web de la Iniciativa Spotlight, en <https://www.spotlightinitiative.org/>.

**Figura 4.10. La violencia de pareja contra las mujeres en la región es generalizada**

*Porcentaje de mujeres abusadas física o sexualmente por alguna pareja, último año disponible, 2003-2017*

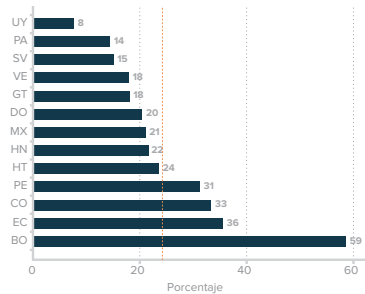


Fuente: Arjona 2021, Documento de Antecedentes para el IRDH 2021 de PNUD ALC, basado en datos de Bott et al. (2019).

Nota: el promedio de ALC está representado por la línea naranja punteada.

**Figura 4.11. En la mayoría de los países, más de una de cada diez mujeres han sido abusadas sexual o físicamente por su pareja más reciente**

*Porcentaje de mujeres abusadas física o sexualmente por su pareja más reciente, último año disponible, 2003-2017*

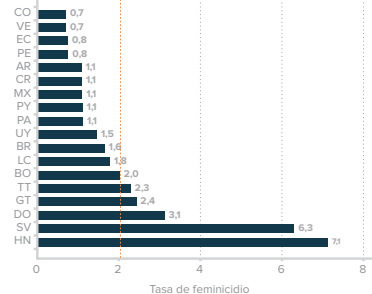


Fuente: Arjona 2021, Documento de Antecedentes para el IRDH 2021 de PNUD ALC, basado en datos de Bott et al. (2019).

Nota: el promedio de ALC está representado por la línea naranja punteada.

**Figura 4.12. En ALC, América Central es la subregión con mayores niveles de feminicidio**

*Tasa promedio de feminicidio por 100.000 habitantes en países de ALC, 2000-2019*



Fuente: Arjona 2021, Documento de Antecedentes para el IRDH 2021 de PNUD ALC; Femicidio o Feminicidio (tablero de indicadores), Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Santiago, Chile, <https://oig.cepal.org/en/indicators/femicide-or-feminicide>.

Nota: el promedio de ALC está representado por la línea naranja punteada.

La violencia también ha afectado gravemente a la infancia y a las minorías sexuales y de género de la región. Se calcula que el 58 por ciento de los niños de la región han estado expuestos a abusos físicos, sexuales o emocionales<sup>55</sup>. Los datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) sugieren que en muchos de los países de ALC, la mayoría de los niños son objeto de disciplina violenta en el hogar. Cerca de 2 millones de niños en la región han sido víctimas de la explotación sexual, y el 48 por ciento de las víctimas de la trata de personas en América Central y el Caribe son menores de edad, frente al 34 por ciento a nivel mundial<sup>56</sup>. Los cinco países con las tasas de homicidio de adolescentes más altas del mundo se encuentran en la región: Venezuela, Honduras, Colombia, El Salvador y Brasil<sup>57</sup>. Los datos relativos a la violencia contra las personas LGBT+ son aún más escasos que otros debido a la inexactitud y el subregistro en las denuncias. Las cifras disponibles sugieren que ALC concentra una gran parte de los homicidios contra personas transgénero, pero los conjuntos de datos disponibles incluyen países que informan de un solo

<sup>55</sup> Hillis et al. (2016).

<sup>56</sup> Save the Children (2017); UNODC (2018).

<sup>57</sup> UNICEF (2017).

suceso de este tipo de violencia entre 2008 y 2011, lo cual no inspira confianza respecto a la exactitud de la información<sup>58</sup>. La información más confiable procede de organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones comunitarias de base que mantienen sus propios observatorios para hacerle seguimiento a las noticias locales (recuadro 4.4).

<sup>58</sup> Balzer y Hutta (2012).

#### **Recuadro 4.4. Ha habido avances en la protección de los derechos de las personas LGBT+, pero los niveles de violencia en su contra continúan siendo altos**

La comunidad LGBT+ de ALC sigue encontrando descalces entre los derechos jurídicos y la realidad. Según SinViolencia LGBTI, una red regional de grupos defensores de las personas LGBT+, cuatro personas LGBT+ son asesinadas en la región cada día<sup>a</sup>. En Colombia, los impresionantes logros en la protección de los derechos de las personas LGBT+ contrastan con los altos niveles de discriminación y violencia. Frente a este telón de fondo, el país ofrece un valioso estudio de caso para la región por la disponibilidad de datos recientes sobre el asunto y por la respuesta de las organizaciones comunitarias de base, que investigan y denuncian los casos de discriminación y violencia de personas LGBT+ y ofrecen asesoramiento jurídico a las víctimas.

Una encuesta realizada en 2019 por el Instituto Williams de la Universidad de California en Los Ángeles, que incluyó a casi 5.000 participantes LGBT+ en Colombia, reveló patrones altamente perturbadores<sup>b</sup>. Entre los encuestados, el 72 por ciento reportó angustia psicológica, el 55 por ciento había tenido pensamientos suicidas y el 25 por ciento había intentado suicidarse. Entre estos últimos, el 33 por ciento eran mujeres bisexuales y el 31 por ciento eran personas transgénero. Entre los encuestados, el 67 por ciento habían sido agredidos verbalmente, el 35 por ciento habían sido amenazados, el 21 por ciento habían sido agredidos sexualmente y el 23 por ciento habían sido golpeados. La proporción de encuestados que había sido agredida verbal

o físicamente por autoridades públicas ascendía al 20 por ciento y al 11 por ciento, respectivamente. Entre los participantes, el 75 por ciento habían sufrido acoso cuando eran menores de edad y el 73 por ciento afirmaron haber estado expuestos rutinariamente a microagresiones. Estos porcentajes fueron notablemente más altos en el caso de los encuestados transgénero.

Los prejuicios y la violencia suelen ir de la mano, y los asesinatos de la población LGBT+ de Colombia son a menudo el último paso en una historia de abusos y discriminación dentro y fuera del hogar<sup>c</sup>. En agosto de 2020, un joven de 17 años de la ciudad de Sincelejo atacó brutalmente a Luis, un vecino gay de la misma edad, con un machete, mutilándole el brazo. Esto ocurrió después de que Luis había sido reiteradamente intimidado y acosado por ser homosexual. Tres organizaciones que trabajan en temas relacionados con la población LGBT+ —Colombia Diversa, Pink Consultores y Sucre Diversa— están brindando apoyo a Luis y a su familia tras la agresión. Asimismo, la ONG Red Comunitaria Trans, que realiza un seguimiento activo de las diferentes formas de violencia contra las trabajadoras sexuales transgénero en Colombia, denunció en junio de 2020 que varios agentes de policía habían golpeado, disparado y perseguido a cinco trabajadoras sexuales en la capital del país, Bogotá, después de insultarlas verbalmente.

Según Temblores ONG, se registraron 1.944 actos de violencia contra personas LGBT+ en Bogotá entre 2010 y 2020<sup>d</sup>. Los autores más comunes de estos actos fueron amigos, desconocidos y conocidos no cercanos a la persona, y agentes de policía y militares. Colombia Diversa ha documentado que las mujeres transgénero estaban entre las víctimas más frecuentes de los homicidios vinculados con discriminación contra la comunidad LGBT+ en espacios públicos en 2015<sup>e</sup>. Están relativamente más expuestas a estas formas de victimización debido a las ocupaciones altamente criminalizadas que se ven obligadas a aceptar en ausencia de mejores oportunidades laborales. El 95 por ciento de los homicidios de personas LGBT+ entre 2012 y 2015 nunca han conducido a arrestos.

No es probable que disminuya la persistencia de los crímenes motivados por prejuicios contra la comunidad LGBT+ sin un compromiso firme y una línea de acción clara de los gobiernos de toda la región para confrontar la intolerancia hacia la diversidad de orientación sexual e identidad de género.

---

<sup>a</sup> SinViolencia LGBTI (2019).

<sup>b</sup> Choi *et al.* (2020).

<sup>c</sup> Moloney (2019).

<sup>d</sup> Temblores ONG (2019).

<sup>e</sup> Colombia Diversa (2016).



Otro hecho alarmante es el creciente apoyo popular hacia el uso de la violencia extrajudicial como forma válida de resolver conflictos entre los países de la región, lo que refleja unos niveles bajos de confianza en las instituciones. Los porcentajes de la población que apoyan estos actos se sitúan entre el 40 por ciento y el 52 por ciento en Belice, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Perú y República Dominicana; entre el 30 por ciento y el 40 por ciento en Brasil, Colombia, Guyana, México, Nicaragua, Paraguay, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela, y entre el 20 por ciento y el 30 por ciento en Argentina, Chile, Costa Rica y Panamá<sup>59</sup>.

### 4.3. La desigualdad es tanto un resultado como una fuente de violencia en la región

#### La desigualdad está asociada con el aumento de la violencia

Varios estudios empíricos han examinado la relación entre la desigualdad y el crimen. La mayoría de ellos encuentran una asociación positiva<sup>60</sup>. Otros no descubren conexiones significativas<sup>61</sup>. Luego de estudiar las tendencias de desigualdad y crimen a nivel mundial durante la segunda mitad del siglo XX, los investigadores han identificado un posible efecto causal subyacente de la desigualdad sobre las tasas de criminalidad<sup>62</sup>. Algunos han ilustrado la forma en que los niveles de crimen en América Latina guardan una relación estrecha con las características socioeconómicas urbanas<sup>63</sup>. Más recientemente, los investigadores han detectado una relación causal entre las variaciones en los factores socioeconómicos y el crimen en el contexto de la guerra contra las drogas en México<sup>64</sup>.

Este informe construye sobre este trabajo previo para analizar datos de períodos más recientes y proporcionar nueva evidencia empírica sobre la relación entre la desigualdad y los niveles de homicidio y victimización<sup>65</sup>. Utiliza datos nacionales y subnacionales procedentes de diversas fuentes para elaborar un análisis longitudinal. Dicho análisis tiene en cuenta diferentes mediciones de violencia, incluye distintas especificaciones del modelo, y corrige la posible endogeneidad de la desigualdad utilizando datos históricos como instrumentos. Los resultados señalan una relación

<sup>59</sup> Cruz y Kloppe-Santamaría (2019).

<sup>60</sup> Kelly (2000), Machin y Meghir (2004), Demombynes y Özler (2005), Buonanno y Vargas (2019).

<sup>61</sup> Bourguignon *et al.* (2003), Corvalan y Pazzona (2019).

<sup>62</sup> Fajnzylber, Lederman y Loayza (2002).

<sup>63</sup> Gaviria y Pagés (2002).

<sup>64</sup> Enamorado *et al.* (2016).

<sup>65</sup> Ver Schargrodsky y Freira (2021) para detalles adicionales sobre las recientes contribuciones empíricas cubiertas en esta sección.

positiva, significativa y robusta entre desigualdad y violencia. Son coherentes para todas las mediciones de la violencia estudiadas e implican que mayores niveles de desigualdad de ingresos medidos por el índice de Gini están asociados a aumentos en las tasas de homicidio y de victimización por delitos. El efecto de la desigualdad en los homicidios parece más fuerte en el caso de las víctimas masculinas. Lo mismo ocurre con las tasas de victimización. La victimización disminuye con la edad. Al juntarse con indicadores sobre la asociación entre género y crimen, se llega a la conclusión de que los hombres jóvenes padecen la carga principal del crimen. La victimización aumenta con el nivel educativo. Si se considera la etnia, los grupos mestizos y mulatos se enfrentan a mayores tasas de victimización. Los resultados también sugieren que los hogares más ricos de ALC sufren más victimización por delitos en general, especialmente robos, hurtos y fraude; pero los hogares de menor nivel socioeconómico son víctimas de más homicidios. El estudio también concluye que, en relación con los países de Europa Occidental, los países de ALC presentan tasas de homicidio y de victimización por delitos significativamente superiores. (El recuadro 4.5 ofrece detalles sobre el razonamiento econométrico y el proceso que sustenta estas conclusiones).

### **Recuadro 4.5. Nuevos datos empíricos sobre la relación entre desigualdad y violencia**

El documento de antecedentes escrito por Schargrotsky y Freira (2021) para este reporte, “Inequality and Crime in Latin America and the Caribbean: New Data for an Old Question” (Desigualdad y delito en América Latina y el Caribe: nuevos datos para una vieja pregunta), analiza la relación entre desigualdad y violencia en un contexto empírico. Encuentra evidencia robusta de que la mayor desigualdad de ingresos está acompañada por una mayor incidencia de violencia. Los autores utilizan las tasas de homicidio y de victimización como medidas de violencia y especificaciones alternativas de modelos empíricos para controlar por otros factores determinantes. También utilizan diferentes muestras, que incluyen países de todos los continentes o se centran exclusivamente en los países de ALC o en regiones dentro de los países de ALC.

Dadas las deficiencias de los sistemas estadísticos sobre crimen y violencia en la región, los datos se extraen de fuentes diversas:

- *Tasas de homicidio*: (a) un panel desbalanceado de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes por año que cubre 106 países desde 1995 hasta 2017 (Indicadores del Desarrollo Mundial), y (b) un panel desbalanceado de homicidios por cada 100.000 habitantes por año que cubre 123 países desde 1995 hasta 2017 (Estudio Carga Mundial de las Enfermedades)<sup>a</sup>.
- *Tasas de victimización por delitos*: (a) una base de datos de corte transversal de la proporción de encuestados que afirmaron haber sido víctimas de un delito en los doce meses anteriores, que abarca 42 países y 60.472 personas entre 2010 y 2014, en un año por cada país (Encuesta Mundial de Valores) y (b) un panel desbalanceado de la proporción de encuestados que declararon haber sido víctimas de un delito en los doce meses anteriores, que abarca 18 países de ALC y un promedio de 14.000 individuos por año, de 1995 a 2018 (Latinobarómetro)<sup>b</sup>.
- Los coeficientes o índices de Gini a nivel de país (PovCalNet) y los coeficientes o índices de Gini a nivel subnacional para los países de ALC (SEDLAC)<sup>c</sup>.
- Datos del PIB (Perspectivas de la Economía Mundial), tasas de pobreza (Indicadores del Desarrollo Mundial), brechas de pobreza (PovCalNet) y tasas de finalización de la educación primaria (Indicadores del Desarrollo Mundial), todos utilizados como controles<sup>d</sup>.

Para abordar los posibles sesgos en la estimación, derivados de la simultaneidad explicativa de los factores políticos e institucionales sobre la desigualdad y el crimen y la posible endogeneidad por causalidad inversa directa de la violencia sobre la desigualdad, las estimaciones incluyen efectos fijos de país y utilizan datos históricos en un contexto de variables instrumentales. En concreto, el estudio utiliza como instrumentos la tasa de mortalidad de colonos y las variables de excolonias de Acemoglu et al. (2001) y las mediciones de la esclavitud de africanos y nativos de Soares, Assunção y Goulart (2012). Se demuestra que estas variables instrumentales tienen un fuerte poder explicativo sobre la desigualdad.

Schargrotsky y Freira (2021) encuentran que un aumento de 10 puntos en el índice de Gini se traduce en 9,3 homicidios adicionales por cada 100.000 habitantes. Las estimaciones en las regresiones que utilizan las tasas de victimización por crimen como variable dependiente varían según la fuentes de datos. Un aumento de 10 puntos en el índice de Gini implica un aumento en la tasa de victimización de la Encuesta Mundial de Valores de 3,7 puntos porcentuales, lo que representa un aumento del 20 por ciento con respecto al nivel de referencia. A su vez, un aumento de 10 puntos en el índice de Gini conduce a un aumento de 5,9 puntos porcentuales en la tasa de victimización de Latinobarómetro, lo que equivale a un 16,6 por ciento adicional con respecto al nivel de referencia. El análisis de esta relación a nivel subnacional encuentra que un aumento del índice de Gini de 10 puntos equivale a un aumento de 4,1 puntos porcentuales en la tasa de victimización.

Los hallazgos de Schargrodsky y Freira también destacan la magnitud del problema de la violencia en ALC desde una perspectiva global. Al comparar las regiones del mundo, encuentran que los países de ALC tienen 14,3 homicidios adicionales por cada 100.000 habitantes al año y 11,8 puntos porcentuales adicionales en las tasas de victimización por delitos en relación con los países de Europa Occidental. Los coeficientes de ALC en las regresiones son los más elevados entre las regiones del mundo y sugieren que la violencia “adicional” asociada con ALC representa dos tercios de los homicidios totales de la región.

El impacto de la pobreza en las tasas de homicidio y de victimización por delitos es menos robusto y más inestable que el de la desigualdad. Mientras que esta última parece ser un factor determinante de los niveles de violencia, la primera no lo es.

<sup>a</sup> Ver la Herramienta de Resultados CME (base de datos), Estudio Carga Mundial de las Enfermedades, Intercambio Mundial de Datos en Salud, Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud, Seattle, <http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool>,. IDM (Indicadores del Desarrollo Mundial) (tablero de indicadores), Banco Mundial, Washington, DC, <https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/>.

<sup>b</sup> Ver Latinobarómetro (tablero de indicadores), Corporación Latinobarómetro, Santiago, Chile, <http://www.latinobarometro.org/lat.jsp>; EMV (Encuesta Mundial de Valores) (tablero de indicadores), King's College, Old Aberdeen, Reino Unido, <http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp>.

<sup>c</sup> Ver PovCalNet (herramienta de análisis en línea) (tablero de indicadores), Banco Mundial, Washington, DC, <http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/>; SEDLAC (Base de Datos Socioeconómicos para América Latina y el Caribe), Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina, y Laboratorio de Equidad, Equipo para el Desarrollo Estadístico, Banco Mundial, Washington, DC, <http://sedlac.econo.unlp.edu.ar/wp/en/estadisticas/sedlac/estadisticas/>.

<sup>d</sup> Ver PovcalNet (herramienta de análisis en línea) (tablero de indicadores), Banco Mundial, Washington, DC, <http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/>; IDM (Indicadores del Desarrollo Mundial) (tablero de indicadores), Banco Mundial, Washington, DC, <https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/>; PEM (Bases de datos de las Perspectivas de la Economía Mundial) (tablero de indicadores), Fondo Monetario Internacional, Washington, DC, <https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/index.aspx>.

## Los más vulnerables están sobrerrepresentados entre las víctimas de la violencia

Para arrojar luz sobre los efectos desproporcionados de la violencia sobre poblaciones ya desfavorecidas y las implicaciones para la desigualdad, el análisis comienza mostrando datos sobre cómo los más vulnerables están regularmente sobrerrepresentados entre las víctimas de la violencia.

Como en el resto del mundo, la mayoría de las víctimas de homicidio en ALC son hombres jóvenes. Sin embargo, no todos los hombres jóvenes corren el mismo riesgo de violencia letal. La violencia criminal se concentra en los barrios urbanos

más pobres y en las zonas rurales con presencia estatal precaria y fuertes economías ilícitas, y en comunidades fronterizas<sup>66</sup>. Los homicidios suelen afectar excesivamente a los pobres<sup>67</sup>. También se ha encontrado que las minorías étnicas enfrentan un riesgo mayor de victimización letal. La tasa de homicidio de jóvenes afrodescendientes entre 12 y 29 años en Brasil fue de 70,8 por cada 100.000 habitantes en 2012, mientras que el equivalente para los jóvenes no afrodescendientes fue de 27,8<sup>68</sup>. En lo que respecta a la delincuencia y el crimen, algunos estudios consideran que determinados crímenes como los robos callejeros en Argentina<sup>69</sup>, afectan a los ricos y a los pobres por igual. Otros sostienen que la delincuencia suele afectar a los hogares ricos y de clase media que viven en las grandes ciudades<sup>70</sup>. Es más probable que las personas con educación primaria y secundaria reporten la presencia de violencia entre pandillas en su lugar de residencia que las personas con educación superior<sup>71</sup>. Esto también sucede entre los encuestados de minorías étnicas en comparación con los encuestados blancos.

También se ha observado que la victimización es más común entre las personas que enfrentan múltiples desventajas simultáneas por cuenta de su género, etnia, orientación sexual o identidad de género, o condición socioeconómica. Por ejemplo, las minorías étnicas y la comunidad LGBT+ corren mayor riesgo de ser asesinadas y las mujeres LGBT+ que son pobres tienen más probabilidades de ser víctimas de acoso policial y presentan tasas de encarcelamiento más altas<sup>72</sup>. Las mujeres indígenas y afrodescendientes en Ecuador son objeto de mayores niveles de violencia de género<sup>73</sup>. Los homicidios de mujeres afrodescendientes en Brasil aumentaron un 54,2 por ciento entre 2003 y 2013, mientras que los homicidios de mujeres no afrodescendientes durante el mismo período disminuyeron un 9,8 por ciento<sup>74</sup>. El 66 por ciento de todas las mujeres víctimas de homicidio en Brasil eran afrodescendientes, a pesar de que las personas afrodescendientes representan aproximadamente el 51 por ciento de la población del país<sup>75,76</sup>. Algunos estudios han revelado que las mujeres pobres tienen más probabilidades de sufrir violencia doméstica que las mujeres no pobres en Barbados, Chile, Colombia, Haití y Nicaragua<sup>77</sup>. Sin embargo, otros estudios no han encontrado una relación positiva en República Dominicana, Nicaragua, o Perú<sup>78</sup>.

<sup>66</sup> Yashar (2018).

<sup>67</sup> Soares (2006).

<sup>68</sup> CEPAL (2017).

<sup>69</sup> Di Tella, Galiani y Schargrodsky (2010).

<sup>70</sup> Gaviria y Pagés (2002).

<sup>71</sup> Datos para 2018 de Latinobarómetro (tablero de indicadores), Corporación Latinobarómetro, Santiago, Chile, <http://www.latinobarometro.org/lat.jsp>.

<sup>72</sup> CIDH (2015).

<sup>73</sup> CEPAL (2018).

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Cerqueira *et al.* (2019).

<sup>76</sup> Para Brasil se usa el término afrodescendiente para referirse tanto a las personas pretas como a las pardas.

<sup>77</sup> Larrain (1993); Ellsberg *et al.* (2000); Flake y Forste (2006); BSS (2014).

<sup>78</sup> Flake y Forste (2006).

En el ámbito de la violencia política, la agresión hacia líderes sociales ejerce una carga excesiva sobre las minorías étnicas y los grupos económicamente vulnerables, que suelen ser los que representan las demandas de las personas afectadas por las injusticias territoriales y ambientales. La mayoría de los líderes asesinados en Colombia entre 2017 y 2019 eran afrodescendientes, indígenas, trabajadores rurales o representantes de sindicatos<sup>79</sup>. En Brasil, la mayoría de los líderes sociales asesinados pertenecía a comunidades que enfrentaban múltiples formas de desposesión, como las organizaciones de trabajadores rurales que se movilizaban por tierras y servicios públicos o las poblaciones indígenas que defendían sus territorios y recursos naturales<sup>80</sup>. En medio del conflicto civil colombiano, los grupos armados concentraban sus operaciones en las zonas rurales, y la mayor parte de la violencia tenía lugar fuera de las grandes ciudades<sup>81</sup>. Además, solían reclutar a personas de bajos ingresos que generalmente ya habían sido victimizadas<sup>82</sup>. La mayoría de las víctimas del enfrentamiento civil peruano vivía en zonas rurales y trabajaba en la agricultura<sup>83</sup>. En cuanto a la violencia estatal, la proporción de víctimas de abusos policiales entre los grupos de bajos ingresos o las minorías étnicas es mayor que entre el resto de la población en Argentina, Brasil, Chile y Colombia<sup>84</sup>. Los afrodescendientes de América Latina, especialmente los jóvenes, tienen más probabilidades de ser detenidos y registrados por la policía en la calle debido a la discriminación racial; también es más probable que sean arrestados y encarcelados, y sus penas suelen ser más severas<sup>85</sup>. La criminalización de las protestas también parece afectar de forma desproporcionada a los pobres<sup>86</sup>.

Las personas y las comunidades que de por sí ya se enfrentan a adversidades en términos de ingresos, derechos, acceso a los servicios sociales o representación política, corren un mayor riesgo de ser víctimas de la mayoría de las formas de violencia. Todos los tipos de crímenes, a excepción de los robos y los secuestros, tienden a afectar de manera desproporcionada a las personas y comunidades pobres, así como a las zonas geográficas con precaria presencia estatal. Esto implica que los efectos negativos de la violencia amplían la desigualdad porque afectan a personas que ya están en desventaja. La violencia puede, por lo tanto, aumentar las desigualdades existentes en el desarrollo humano porque empeora la situación de algunos miembros de la sociedad en los múltiples aspectos del desarrollo humano en los que están desfavorecidos. Según Arjona (2021), el tipo y la magnitud del impacto

---

<sup>79</sup> International Crisis Group (2020).

<sup>80</sup> Amnistía Internacional (2016).

<sup>81</sup> GMH (2013).

<sup>82</sup> Arjona y Kalyvas (2012).

<sup>83</sup> CVR (2003).

<sup>84</sup> González (2019).

<sup>85</sup> CEPAL (2017).

<sup>86</sup> Doran (2017).

que la violencia tiene sobre el desarrollo humano estará determinado por la forma de violencia y su severidad, así como por aquellos atributos de las víctimas y su contexto que puedan moderar los efectos.

## La violencia restringe los derechos y las libertades

La violencia puede aumentar la desigualdad al socavar el derecho a la vida y la integridad física de grupos desfavorecidos. Gran parte de la violencia contra grupos indígenas y afrodescendientes está asociada a la tierra en la que habitan. Esta tierra suele ser un activo de alto valor para algunas actividades económicas altamente rentables, desde el acceso al agua dulce y a los metales en las altas montañas andinas a lo largo de gran parte de América del Sur, hasta la minería en las cuencas del Amazonas y del Orinoco en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Dichas actividades económicas suponen una amenaza para la integridad ecológica de la diversidad cultural y biológica del territorio y de la población local. Con frecuencia, los líderes indígenas y las organizaciones ambientales son intimidados y victimizados. Al mismo tiempo, la concentración de la violencia letal en los barrios pobres y las zonas rurales con presencia estatal precaria exacerba la desigualdad subnacional, ya que las comunidades económicamente desfavorecidas e institucionalmente abandonadas deben enfrentarse a mayor inseguridad. Esto se agrava aún más por el hecho de que los miembros de estas comunidades carecen de la influencia política de las personas más acomodadas y sus preocupaciones y reclamos sobre seguridad reciben menos atención por parte de los encargados de las decisiones de política y las fuerzas de seguridad.

Del mismo modo, dado que las personas adaptan su comportamiento para disminuir el riesgo de ser victimizadas en formas que limitan sus decisiones, la violencia y la amenaza de violencia pueden aumentar la desigualdad al socavar las libertades de las personas<sup>87</sup>. Una encuesta del 2012 encontró que hasta el 65 por ciento de la población latinoamericana dejó de salir por la noche debido a la inseguridad y el 13 por ciento pensó en mudarse a otro lugar por miedo al crimen<sup>88</sup>. Este impacto es más pronunciado entre los pobres porque tienen menos alternativas para adaptar su comportamiento con el objetivo de evitar el crimen dado que es menos probable que puedan pagar medidas de seguridad y protección o reubicarse en zonas más seguras. Este efecto puede ser significativo. Cerca de la mitad de los homicidios ocurridos en la región en 2012 se produjeron en el hogar o el barrio de la víctima y otro 30 por ciento ocurrió en el municipio de la víctima<sup>89</sup>. Del mismo modo, las

---

<sup>87</sup> Lane (2014).

<sup>88</sup> PNUD (2013); Barómetro de las Américas (tablero de indicadores), Proyecto de Opinión Pública de América Latina, Universidad de Vanderbilt, Nashville, Tennessee, <https://www.vanderbilt.edu/lapop/core-surveys.php>.

<sup>89</sup> Chioda (2017).

mujeres enfrentan mayores obstáculos a su movilidad por temor a ser objeto de acoso sexual. Por ejemplo, un estudio de 2018 encontró que el 70 por ciento de las mujeres encuestadas en Buenos Aires, Quito y Santiago de Chile se sentían inseguras al viajar en transporte público<sup>90</sup>. Las respuestas del aparato estatal para frenar el crimen y la violencia política también pueden aumentar la desigualdad al provocar una sensación de inseguridad y violar los derechos individuales en las poblaciones de bajos ingresos y las minorías étnicas, ya que estas acciones persecutorias suelen estar sesgadas en contra de los desfavorecidos.

### La violencia afecta la salud y la educación

La violencia tiene efectos críticos en la formación de capital humano. En el contexto de la salud, esto no aplica únicamente a los problemas de la salud física como consecuencia de la violencia, sino también a las repercusiones sobre la salud mental. Ambos efectos pueden exacerbar las desigualdades existentes. Por ejemplo, en el contexto de la desigualdad de género, el impacto de la violencia sobre la salud mental de las mujeres es grave y suele estar asociado a la mayoría de trastornos mentales<sup>91</sup>. El efecto directo de la violencia en la salud física y mental de las mujeres no solo implica un profundo menoscabo de un aspecto central de su bienestar, sino que además las expone a mayores desventajas por la interferencia que genera en su vida económica, social y política. Las desigualdades en educación, salud, acceso al empleo y participación política a las que se enfrentan las mujeres en ALC pueden verse exacerbadas por la violencia, que obstaculiza sus habilidades cognitivas, emocionales y sociales<sup>92</sup>. En el caso de los niños, la violencia puede ampliar la brecha entre los privilegiados y los desfavorecidos al afectar su salud física y mental. Los niños pueden sufrir enormes traumas psicológicos y fisiológicos causados por las experiencias de violencia contra ellos y contra sus progenitores, profesores y comunidades<sup>93</sup>. Estas experiencias pueden tener efectos irreparables en las zonas del cerebro que regulan el afecto, la memoria y la atención<sup>94</sup>. Es probable que estos efectos negativos amplíen las diferencias en el desarrollo humano, ya que los niños de familias de bajos ingresos y de minorías étnicas corren mayor riesgo de ser objeto de la mayoría de las formas de violencia.

La desigualdad en el ámbito de la salud puede verse agravada como consecuencia de la violencia política y criminal que afecta de forma desproporcionada a las personas que viven en zonas donde operan grupos armados. Además del número de muertes

<sup>90</sup> CAF y Fundación FIA (2018).

<sup>91</sup> Jordan, Campbell y Follingstad (2010).

<sup>92</sup> ONU Mujeres (2012).

<sup>93</sup> Molteno *et al.* (1999).

<sup>94</sup> Teicher (2002); Arnsten (2009).



y lesiones, las guerras civiles suelen aumentar la prevalencia del trastorno de estrés postraumático (TEPT) y pueden deteriorar la salud pública incluso después de la guerra, afectando desproporcionadamente a las mujeres y los niños<sup>95</sup>. Debido a la violencia y la migración forzada, las personas refugiadas tienden a mostrar mayores tasas de trastornos del estado de ánimo, enfermedades psíquicas y TEPT que las poblaciones residentes no migrantes<sup>96</sup>. Asimismo, la minería ilícita puede aumentar la desigualdad subnacional en materia de salud al causar daños ambientales, afectando directamente a las comunidades cercanas a las explotaciones mineras que ya experimentan menores niveles de desarrollo y pueden experimentar consecuencias de salud debilitantes, como el contacto con agua contaminada, lo que las hace retroceder en términos de salud y bienestar con respecto al resto del país.

La brecha en educación entre las personas y comunidades privilegiadas y las desfavorecidas puede ampliarse por el impacto de la violencia en los resultados y los logros educativos de los niños y los jóvenes. El efecto de la violencia en el desarrollo de habilidades cognitivas y no cognitivas puede debilitar la capacidad de aprendizaje y disminuir el rendimiento académico<sup>97</sup>. Este efecto es mayor entre las escuelas situadas en zonas urbanas pobres y en los centros de educación secundaria situados en áreas con actividad de bandas criminales. El deterioro de los resultados educativos puede mantenerse mucho tiempo después de que se produzcan los acontecimientos violentos, y el impacto de la violencia en la salud mental de niños y jóvenes puede dar lugar a enfermedades mentales, llevando a calificaciones más bajas, mayor absentismo y tasas más elevadas de deserción escolar<sup>98</sup>. De manera similar, la violencia puede amplificar la desigualdad a través de su efecto perjudicial sobre la calidad y la accesibilidad de las escuelas. La destrucción de las escuelas o la interrupción de las actividades escolares limitan la oportunidad de los niños de recibir una educación<sup>99</sup>. Los entornos violentos también pueden disuadir a los alumnos de asistir a la escuela por miedo a la violencia o por el peligro de tener que atravesar barrios inseguros de camino a la escuela. Si las agresiones se dirigen a los progenitores, la violencia amplía la brecha de apoyo familiar en la educación al interrumpir el importante papel de las madres y padres en el desarrollo de las habilidades cognitivas y socioemocionales de los niños y los jóvenes. La ausencia de las madres o padres que corren mayor riesgo de ser víctimas del crimen puede dejar a sus hijos emocionalmente desatendidos y perjudicar sus habilidades en la toma de decisiones<sup>100</sup>. Al crear barreras para el acceso a la educación, afectar negativamente el desarrollo infantil y el rendimiento

---

<sup>95</sup> Collier *et al.* (2003); Iqbal (2006).

<sup>96</sup> Porter y Haslam (2005), Steel *et al.* (2009).

<sup>97</sup> Molteno *et al.* (1999); Burdick-Will *et al.* (2011).

<sup>98</sup> McLeod y Fettes (2007); Molano, Harker y Cristancho (2018).

<sup>99</sup> Molteno *et al.* (1999).

<sup>100</sup> Cuartas, Harker y Moya (2016).

académico y provocar enfermedades mentales entre aquellos niños que ya están en desventaja, la violencia puede conducir a mayor desigualdad.

### La violencia afecta la generación de ingresos, aumentando la desigualdad

Los efectos de la violencia en la desigualdad de ingresos operan a diferentes niveles. A nivel individual, la violencia puede poner en peligro los prospectos de ingresos de las personas desfavorecidas a través de múltiples canales, creando obstáculos adicionales para la reducción de la desigualdad. Por ejemplo, puede ampliar la brecha de ingresos al deteriorar la salud mental entre los pobres y, por lo tanto, alterar su participación en el mercado de trabajo. El miedo y la ansiedad, causados por la amenaza de la violencia, pueden alterar el comportamiento laboral, afectando así negativamente los logros educativos y el desarrollo cognitivo, empeorando los resultados en el mercado laboral y socavando las habilidades no cognitivas<sup>101</sup>. Por estas razones, la violencia de género puede empeorar las desigualdades de género existentes en el mercado laboral<sup>102</sup>. Puede además amplificar la desigualdad económica dado el efecto desproporcionado de la violencia de pareja sobre las mujeres de bajos ingresos. La migración provocada por la violencia también puede exacerbar la desigualdad de ingresos porque los migrantes, los desplazados internos y los refugiados tienen mayores dificultades para encontrar trabajo y, por lo tanto, encuentran menos opciones para mejorar su situación económica. Si quienes migran son los más desfavorecidos, la desigualdad está destinada a prevalecer.

La violencia puede desestabilizar las economías locales en zonas desfavorecidas, condenándolas a un menor crecimiento económico. Las olas de violencia en las economías rurales locales que ya tienen menor crecimiento económico e instituciones poco eficaces amplían la desigualdad subnacional mediante el deterioro adicional del bienestar económico de la población. En México, las localidades afectadas por la violencia relacionada con el narcotráfico experimentaron una disminución de la producción, las ganancias, los salarios y el número de empresas y trabajadores del sector manufacturero<sup>103</sup>. En Belo Horizonte y en Rio de Janeiro, en Brasil, el crimen corresponde al 5 por ciento y 4 por ciento de la producción anual, respectivamente<sup>104</sup>.

La violencia puede suponer un obstáculo para los esfuerzos de reducción de la desigualdad. Los altos niveles de violencia usualmente se convierten en la principal preocupación de la ciudadanía, impidiendo así que la desigualdad se convierta en una prioridad de la política. El crimen en ALC ha llevado a una reducción en el apoyo

<sup>101</sup> Heckman y Rubinstein (2001); Murnane *et al.* (2001); Heckman, Stixrud y Urzua (2006).

<sup>102</sup> Swanberg, Logan y Macke (2005).

<sup>103</sup> Gutiérrez-Romero y Oviedo (2017).

<sup>104</sup> Rondon y Andrade (2003).

hacia políticas de bienestar. Los elevados niveles de violencia criminal han facilitado la propagación de percepciones de inseguridad y esto ha impedido la consolidación de los sistemas de bienestar. Paradójicamente, las víctimas directamente afectadas por el aumento del crimen son frecuentemente quienes más necesitan del apoyo del bienestar social<sup>105</sup>. La violencia puede incluso funcionar como un instrumento de poder que les permite a las élites mantener el *statu quo* distributivo, dada la contribución de la violencia a la exclusión política de amplios sectores que no pueden reclamar una mayor igualdad a través del proceso democrático. Las élites han tolerado, facilitado y participado en la violencia, interviniendo de forma decidida solo cuando esta amenaza el equilibrio de poder entre el centro y la periferia o la distribución del poder económico y político a nivel local<sup>106</sup>.

### La violencia afecta la gobernanza al reducir la participación política

La violencia puede provocar distorsiones en los procesos políticos ya que acalla las voces y la participación de los desfavorecidos en los debates y decisiones públicas. Algunos estudios encuentran que, tras una guerra civil, las víctimas de la violencia tienden a participar más en actividades políticas que quienes no fueron víctimas y que las víctimas del crimen tienden a involucrarse más en diversas formas de participación política, posiblemente debido al crecimiento postraumático y al valor expresivo de la participación<sup>107</sup>. No obstante, varios estudios encuentran que, en tiempos de guerra, las víctimas participan menos en política<sup>108</sup>. Las víctimas pueden también evitar participar en la vida política ante la presencia de altos niveles de violencia, como en el caso de México<sup>109</sup>. En toda la región, mientras que el crimen no violento parece aumentar la participación política, los crímenes violentos parecen tener el efecto contrario<sup>110</sup>. Los grupos armados no estatales pueden socavar la participación política con su mera presencia<sup>111</sup>. Pueden impedir que los ciudadanos voten o pueden forzarlos a votar por determinados candidatos<sup>112</sup>. Es de esperar que la violencia tenga un mayor impacto sobre la participación política en ALC en aquellos casos en los que la violencia es muy frecuente o generalizada; este impacto negativo, a su vez, aumentaría la desigualdad si aumentara la brecha en la influencia política entre los sectores más acomodados de la sociedad y aquellos con bajos ingresos, o al interior de comunidades desfavorecidas y de minorías étnicas.

<sup>105</sup> Altamirano, Berens y Ley (2020).

<sup>106</sup> Gutiérrez Sanin, Acevedo y Viatela (2007); Carroll (2011); Robinson (2013); Saffon Sanín (2021).

<sup>107</sup> Bateson (2012); Bauer *et al.* (2016).

<sup>108</sup> Acemoglu, Robinson y Santos (2013); Gallego (2018); Arjona, Chacón y García (2020).

<sup>109</sup> Trelles y Carreras (2012), Ley (2018).

<sup>110</sup> Berens y Dallendörfer (2019).

<sup>111</sup> Córdova (2019).

<sup>112</sup> Jaffe (2013), Arjona (2016), Arias (2017).

Algunas formas de crimen y violencia pueden tener consecuencias en la sociedad a través de su impacto directo en los sistemas y mecanismos de gobernanza. Las organizaciones criminales y rebeldes afectan a las personas no solo mediante el uso de la violencia, sino también mediante la gobernanza de facto en espacios bajo su control. Este fenómeno ocurre en los barrios marginales de las grandes ciudades, los pueblos rurales en las rutas del narcotráfico y los asentamientos cercanos a cultivos de coca y amapola. La victimización y la violación de los derechos son la moneda común bajo regímenes locales coercitivos en los que estos grupos operan como gobernantes armados<sup>113</sup>. Dentro de estos órdenes sociales corruptos, las autoridades criminales toman control de la seguridad, regulan las actividades económicas organizando la mano de obra y expidiendo permisos de trabajo, regularizan la extorsión como mecanismo de recolección de impuestos, establecen reglas para los mercados, proveen bienes públicos y regulan el comportamiento social, económico y político<sup>114</sup>. También ejercen su influencia sobre la política infiltrándose en los gobiernos locales para acceder a información sensible, persuadiendo a los funcionarios locales para que diseñen y apliquen políticas públicas que favorezcan la actividad criminal, estableciendo alianzas con partidos y políticos, vetando a los candidatos que se presentan a las elecciones o impidiéndoles hacer campaña, coaccionando a las organizaciones civiles y movilizándolo a los votantes para que apoyen a un determinado candidato o participen en protestas. Estos grupos pueden también prohibir ciertas actividades y hacer que otras sean obligatorias y pueden incluso castigar con dureza a las parejas maltratadoras, los ladrones y los violadores.

La gobernanza criminal violenta afecta la desigualdad a nivel subnacional a través de sus efectos sobre la representación, la democracia, el estado de derecho y la calidad de los gobiernos locales. También puede aumentar la desigualdad al socavar la representación política en las comunidades vulnerables. La interferencia de los grupos armados en los procesos democráticos es generalizada en varios países de ALC<sup>115</sup>. Suele llevar a una reducción de la competencia política y la pluralidad y a una desconfianza generalizada en la democracia y los gobiernos locales debido a la falta de confianza en las elecciones como mecanismos de rendición de cuentas o selección de liderazgos<sup>116</sup>. Esta interferencia suele afectar a las localidades que se encuentran bajo la influencia criminal, que son típicamente las más vulnerables.

La desigualdad también puede aumentar si la democracia y el estado de derecho en las localidades desfavorecidas han sido vulnerados. Se ha comprobado repetidamente que el crimen en ALC menoscaba el apoyo de los ciudadanos a la

---

<sup>113</sup> Mampilly (2011); Arjona, Kasfir y Mampilly (2015); Arjona (2016); Arias (2017); Lessing (2020).

<sup>114</sup> Arjona (2016); Arias (2017).

<sup>115</sup> Arjona, Chacón y García (2020).

<sup>116</sup> Albarracín (2018); Gallego (2018); Ponce (2019).

democracia, las instituciones y el estado de derecho<sup>117</sup>. La consecuencia directa es que las poblaciones desfavorecidas en contextos donde la violencia es mayor o las localidades que tienen instituciones estatales poco eficaces y niveles de desarrollo económico más bajos son menos propensas a exigir a los políticos que defiendan los valores democráticos y el estado de derecho. Las élites políticas pueden explotar el crimen para justificar medidas de seguridad autoritaria y evitar abordar las condiciones estructurales que facilitan el crimen<sup>118</sup>. Las políticas de mano dura se han vuelto cada vez más frecuentes en ALC<sup>119</sup>. Estas socavan la democracia y el estado de derecho y a menudo conducen a la violación de los derechos humanos.

Los efectos de la violencia sobre la calidad de la gobernanza local pueden tener consecuencias negativas sobre la desigualdad, sobre todo debido a la presencia gubernamental asimétrica y la inherente distorsión sobre las instituciones locales y sobre el desarrollo de las comunidades marginadas, un rasgo que comparten los países de la región de ALC<sup>120</sup>. Si los grupos criminales organizados obstruyen la participación y la representación democrática, la calidad de la política local disminuye porque se reducen los incentivos para que los políticos capacitados y honestos se presenten a las elecciones y ganen<sup>121</sup>. La violencia puede reducir la capacidad de gasto de los gobiernos locales en las comunidades vulnerables al desacelerar el crecimiento económico o desviar los recursos necesarios para la provisión de bienes públicos hacia la lucha contra el crimen. Puede empeorar directamente la calidad de las instituciones locales modificando las actividades políticas mediante la amenaza de asesinato político, la erosión de la confianza ciudadana, la represión de las exigencias de transparencia y rendición de cuentas, la subversión del sistema judicial y la implementación de medidas extralegales para la resolución de conflictos.

En últimas, la combinación de estos factores implica que los países de ALC que experimentan niveles sustanciales y frecuentes de violencia tendrán dificultades persistentes para desarrollar un entorno político saludable y consolidar la democracia. La inclusión política se ve interrumpida mientras las élites tradicionales conservan y amplían su influencia, y los más desfavorecidos pierden los incentivos para participar, exigen menos de la democracia y el estado de derecho, y se enfrentan a mayores adversidades por cuenta de una protección de derechos debilitada. El destacado 7 hace hincapié sobre la importancia de una mayor participación de mujeres en el liderazgo político como condición necesaria para democracias más fuertes e inclusivas en la región.

---

<sup>117</sup> Pérez (2003); Malone (2010); Ceobanu, Wood y Ribeiro (2011); Blanco y Ruiz (2013); Carreras (2013); Krause (2014); Visconti (2020).

<sup>118</sup> Chevigny (2003), Soares y Naritomi (2010).

<sup>119</sup> Muggah (2019).

<sup>120</sup> O'Donnell (1993).

<sup>121</sup> Arjona, Chacón y García (2020).

## 4.4. La violencia está relacionada con la desigualdad, pero también con la productividad

### La violencia reduce y distorsiona la inversión

La violencia y el crimen pueden contribuir al bajo crecimiento de la productividad en ALC. Uno de los canales por los que esto puede ocurrir es a través de la disminución de la inversión provocada por la mayor incertidumbre sobre los derechos de propiedad y el estado de derecho que acompañan al crimen y la violencia. La actividad criminal puede interpretarse como un impuesto oculto que deben pagar todos los participantes en la economía. Puede ahuyentar a los inversionistas nacionales o extranjeros, hacer que las empresas sean menos competitivas y distorsionar la asignación de recursos al aumentar la incertidumbre y la ineficiencia<sup>122</sup>. La disminución del crecimiento producida por la reducción de la inversión privada también puede tener su origen en la corrupción, que tiene el efecto adicional de impedir que la estabilidad económica se traduzca en una mejora del poder adquisitivo y de las condiciones de vida de las personas más afectadas por la pérdida de recursos<sup>123</sup>. La corrupción también puede modificar la composición de la inversión extranjera directa, ya que los inversionistas pueden evitar por completo colocar sus recursos en un país o preferir relacionarse con asociados locales para adquirir conocimientos sobre cómo lidiar con la burocracia cuando la corrupción no es restrictiva<sup>124</sup>.

Algunos estudios han llegado a la conclusión de que en ALC el crimen provoca la fisura de las redes y los vínculos entre parientes, amigos y asociados comerciales, especialmente ante la presencia de la migración, pero también que no hay un efecto significativo de la victimización sobre la confianza en las instituciones informales del sector privado —representadas por redes empresariales—<sup>125</sup>. El impacto económico del crimen depende en gran medida de la vulnerabilidad de un país a la violencia y de la magnitud de la destrucción que la violencia infunde, ambos de los cuales determinan la gravedad de los obstáculos al crecimiento y el rendimiento económico, como se ha observado en la evidencia reciente sobre Guatemala<sup>126</sup>. Del mismo modo, se ha comprobado que los homicidios y los robos tuvieron un papel clave en desincentivar la inversión extranjera directa en los estados mexicanos entre 2005 y 2015, afectando especialmente a los estados con los más altos niveles de violencia<sup>127</sup>. Los estudios que no restringen su alcance exclusivamente a la región han identificado

<sup>122</sup> Detotto y Otranto (2010).

<sup>123</sup> Arcia (2012).

<sup>124</sup> Gaviria (2002).

<sup>125</sup> Corbacho, Philipp y Ruiz-Vega (2012).

<sup>126</sup> Ruiz-Estrada y Ndoma (2014).

<sup>127</sup> Cabral, Mollick y Saucedo (2018).

además que la inversión extranjera directa, considerada un flujo financiero esencial para impulsar las iniciativas de los países para superar los obstáculos del desarrollo, se ve disuadida por el crimen violento<sup>128</sup>.

Los elevados costos de una sustancial actividad criminal en las sociedades latinoamericanas, especialmente aquellos costos asociados a cambios comportamentales, reducciones de la inversión, pérdidas de productividad, y cambios en la asignación pública de recursos, responden a un intento de reducir el riesgo de victimización<sup>129</sup>. Las empresas pueden evitar buscar alternativas de crecimiento y oportunidades de mercado para disminuir su visibilidad y exposición a las agresiones violentas<sup>130</sup>. Sin embargo, la evidencia sobre Colombia sugiere que la inversión podría sufrir reducciones como resultado de los secuestros relacionados con las empresas, mientras que la violencia que no es específicamente dirigida hacia funcionarios corporativos no muestra una relación estadística con estas reducciones<sup>131</sup>. Estas conclusiones sugieren que los cambios en la inversión empresarial no parecen responder a una expectativa de caída en la demanda, ni al deterioro de las calificaciones crediticias financieras, ni al aumento de los costos administrativos, sino que son el resultado del temor asociado a la amenaza a la seguridad del empresariado.

### **La violencia afecta la formación de capital humano y, por tanto, la productividad**

Con base en las discusiones sobre los efectos de la violencia en la educación, la salud y los ingresos, el crimen y la victimización también podrían explicar la ralentización del crecimiento económico, ya que las víctimas suelen ver comprometida su capacidad de generar ingresos, sus habilidades de aprendizaje y su productividad laboral. Esto es especialmente cierto en el caso de las mujeres, los niños y las minorías, cuyos prospectos y aspiraciones económicas pueden verse gravemente transformadas por experiencias traumáticas relacionadas con la violencia. Las mujeres víctimas de violencia podrían tener que hacer frente a dificultades adicionales en el mercado de trabajo debido a retos de salud mental, y los niños víctimas de violencia podrían tener peores prospectos laborales debido a los efectos adversos de la violencia en sus trayectorias educativas. Los refugiados y los desplazados por la fuerza que rompen sus vínculos económicos y su estabilidad podrían tener dificultades para adaptarse a diferentes contextos productivos y mantener compromisos laborales estables.

Estudios anteriores dirigidos por el PNUD han señalado que los años perdidos en

---

<sup>128</sup> Brown y Hibbert (2017).

<sup>129</sup> Jaitman (2017).

<sup>130</sup> PNUD (2013).

<sup>131</sup> Pshisva y Suárez (2010).

esperanza de vida derivados del exceso de homicidios en América Latina durante 2009 representaron a una pérdida equivalente al 0,5 por ciento del PIB per cápita de la región ese año<sup>132</sup>. En su conjunto, estos efectos de la violencia sobre la productividad individual implican que las sociedades y los países se ven obligados a renunciar al potencial productivo de una fracción importante de su población y enfrentan serias contracciones en la acumulación de capital humano.

La violencia también puede debilitar las capacidades estatales y productivas al hacerlas más vulnerables a comportamientos rentistas y a la corrupción. La captación de rentas por parte de agentes económicos poderosos que provoca pérdidas de bienestar entre las personas menos poderosas es más probable en contextos de elevada desigualdad y en los que la influencia de las élites sobre las políticas y las leyes es excesiva<sup>133</sup>. Las expansiones en la corrupción suelen ir acompañadas de disminuciones en el crecimiento, debido a que la corrupción desalienta la inversión extranjera y nacional, elimina los incentivos para la innovación, aumenta la incertidumbre, asigna de manera inadecuada el capital humano y aumenta los costos operativos de las empresas<sup>134</sup>. La corrupción tiende a ser más incisiva cuando la inestabilidad política aumenta. En estas situaciones, los políticos y burócratas tienden a abandonar su sentido de responsabilidad y tienen mayores incentivos para extraer rentas. La expansión de los cultivos ilícitos en Colombia dio lugar a aumentos considerables de crimen y violencia. Esto desaceleró el crecimiento económico a través de la disminución de la productividad total de los factores que se produjo como consecuencia de las fracturas a la infraestructura social e incentivó actividades rentistas predatorias y menos productivas que contribuían poco al rendimiento<sup>135</sup>. Además, la corrupción y el crimen pueden reducir la competitividad de las empresas a través de reducciones sustanciales en ventas<sup>136</sup>.

### La violencia provoca el agotamiento del capital físico y natural

Directa o indirectamente, los actos de violencia pueden obstaculizar la acumulación de capital o deteriorar sus existencias. Los crímenes dirigidos explícitamente a destruir o tomar control de activos o propiedades son quizá el caso más evidente del agotamiento de capital. La violencia ejercida sobre el capital natural — como la contaminación del agua debido a la minería ilegal, la destrucción de oleoductos, la incautación de combustibles fósiles, la deforestación destinada a despejar la tierra para que grupos poderosos introduzcan por la fuerza esquemas productivos que

---

<sup>132</sup> PNUD (2013).

<sup>133</sup> Arcia (2012).

<sup>134</sup> Gaviria (2002).

<sup>135</sup> Cárdenas y Rozo (2008).

<sup>136</sup> Gaviria (2002).



exigen un alto consumo de recursos (monocultivos, ganadería extensiva, cultivos ilícitos), y las pérdidas de biodiversidad asociadas a enfrentamientos violentos en gran escala — es especialmente perjudicial. Este tipo de violencia trae consigo costos implícitos a la sociedad al agotar ineficientemente los recursos actuales y priva a las generaciones futuras de la oportunidad de hacer uso de estos recursos. La violencia contra las comunidades étnicas que durante siglos han establecido sistemas alternativos de asentamiento y conservación en territorios ecológicamente ricos podría amenazar la posibilidad de mantener este capital natural para las generaciones futuras. Varios estudios han documentado el impacto positivo de estos arreglos indígenas en la reducción de la deforestación<sup>137</sup>. El destacado 8 subraya los logros recientes en materia de política pública y los retos inherentes a la lucha contra el cambio climático a través de la reducción de las emisiones provenientes de la deforestación y la degradación de los bosques en los países de la región, así como el potencial de los programas basados en incentivos para enfrentar esta cuestión.

Los efectos macroeconómicos de la violencia se manifiestan en pérdidas de productividad potencial y el agotamiento de recursos necesarios para combatir y mitigar la violencia, pero que de lo contrario podrían haberse destinado a otros fines productivos (ver la sección 4.3). El sector público y el privado se enfrentan a la disyuntiva entre apartar recursos económicos para limitar la exposición al crimen y la violencia y efectivamente evitar la victimización. Los beneficios derivados de la lucha y la mitigación de la violencia generalmente superan los costos. No obstante, es imperativo que las naciones evalúen cómo este análisis de costo-beneficio puede adaptarse a y verse reflejado en sus respectivas estrategias, en particular si abarcan fracciones considerables de su PIB, como en el caso de algunos países de ALC. Los costos de la prevención y el castigo del crimen, que incluyen los gastos en salud causados por homicidios y lesiones, las pérdidas por crímenes contra la propiedad, la corrupción y el gasto público en juicios, servicios penitenciarios y rehabilitación representan aproximadamente el 1,04 por ciento del PIB de 2010 de Costa Rica, el 1,21 por ciento del PIB de Chile, el 2,27 por ciento del PIB de Uruguay, el 2,53 por ciento del PIB de Honduras y el 2,45 por ciento del PIB de Paraguay<sup>138</sup>. La victimización se aproxima al 1,18 por ciento del PIB de Uruguay, el 1,47 por ciento en Costa Rica, el 2,11 por ciento en Chile, el 6,36 por ciento en Paraguay y el 8,01 por ciento en Honduras. Si bien pueden estimarse los costos económicos de la violencia, no es posible cuantificar el verdadero costo humano de la violencia ni el trauma a largo plazo que la violencia puede perpetuar hacia el futuro.

---

<sup>137</sup> Vélez *et al.* (2020), Romero y Saavedra (2021).

<sup>138</sup> Aboal *et al.* (2016).

## 4.5. Combatir la violencia es una vía para crear sociedades más igualitarias y productivas

Este capítulo destaca el papel de la violencia como factor subyacente que impulsa la trampa de alta desigualdad y bajo crecimiento en la región. Explora los patrones de la marcada violencia criminal, política, social y doméstica en la región e ilustra cómo la persistencia de esta violencia es tanto un resultado como un factor que contribuye a la doble trampa en ALC. Este círculo vicioso de violencia, desigualdad y bajo crecimiento ofrece un horizonte sombrío para las soluciones en materia de política, en particular dados los actuales reveses previstos por la crisis económica y de salud pública en curso provocada por la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, el progreso es posible, aunque sólo se conseguirá si las políticas adoptadas encaran los desequilibrios de poder subyacentes entre agentes a fin de promover las condiciones necesarias para que los conflictos puedan resolverse por mecanismos pacíficos en lugar de mecanismos violentos. Aunque no existe una única solución en materia de política que funcione para abordar la violencia, el recuadro 4.6 destaca algunas esferas prioritarias que pueden ser más o menos pertinentes dependiendo del contexto. Si dichas esferas son abordadas con éxito, el progreso en la lucha contra la violencia podría allanar el camino hacia sociedades más igualitarias, productivas y pacíficas.

### **Recuadro 4.6. Algunas esferas prioritarias en materia de política para combatir la violencia**

#### **Establecer sistemas judiciales más independientes y eficaces**

Establecer sistemas de justicia independientes y eficaces, capaces de salvaguardar los derechos humanos, facilitar el acceso a la justicia para todos sin discriminación y proporcionar servicios transparentes y objetivos es fundamental para combatir la violencia eficazmente. Al no permitir que los delitos queden impunes y prevenir la revictimización, el sistema judicial elevaría el costo de cometer crímenes. Estos sistemas deben responder adecuadamente a las necesidades diferenciadas, por ejemplo, construyendo capacidad para abordar mejor la violencia contra las mujeres, las personas LGBT+ y los grupos étnicos mediante una clasificación más detallada de los crímenes en las estructuras jurídicas y mediante el entrenamiento

en sensibilización de los funcionarios públicos. Los sistemas de justicia requieren mayor capacidad estatal y legitimidad social para ser efectivos. El apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, a una prensa libre y activa y a la investigación social, que tienen como objetivo recabar información, generar conocimiento e informar al público sobre las realidades de la violencia y la importancia de las soluciones institucionalizadas, es esencial para que las sociedades apoyen y defiendan la labor del sistema de justicia.

### **Contemplar nuevos enfoques para abordar el comercio ilícito**

En ALC, el comercio ilícito es una de las principales causas de la violencia y de la proliferación de poderosas organizaciones criminales, dos factores que aumentan la desigualdad en varios ámbitos críticos del desarrollo. Contemplar la despenalización y la legalización de las sustancias controladas podría ayudar a ALC a dar un paso adelante en la lucha contra el crimen, la violencia, los abusos de derechos humanos y la corrupción, a la vez que facilitaría la construcción de nación y gobernanza efectiva, la consolidación democrática y la justicia ambiental. Para alcanzar los objetivos de sostenibilidad, estos cambios en la regulación también tendrían que apuntar a enfrentar la minería ilegal, la deforestación y los mercados de especulación de tierras, que son otras fuentes de violencia gestionada por organizaciones ilegales y que están acompañadas de una grave degradación del medio ambiente y de problemas de salud pública.

### **Empoderar económicamente a los grupos marginados**

Como se muestra en este capítulo, la marginalización económica puede hacer a las personas aún más vulnerables a la violencia. Por ejemplo, en el contexto de la violencia doméstica, promover el empoderamiento económico de las mujeres es esencial para reducir las situaciones de dependencia que pueden fomentar la violencia. Esto requeriría acciones en múltiples frentes, entre ellos el reconocimiento de las tareas de cuidado y el trabajo doméstico no remunerados y su reducción y redistribución a través de, entre otras cosas, mayor acceso a servicios de cuidado. En la misma línea los gobiernos deben trabajar con las escuelas para que el abuso infantil se identifique tempranamente, y educar a madres, padres y comunidades en el desmantelamiento de los estereotipos de género que pueden reforzar la desigualdad y la violencia. Las acciones de política dirigidas a encarar los obstáculos económicos específicos a los que se enfrentan los adolescentes, las minorías étnicas y la población LGBT+, entre otros, serán fundamentales para identificar rutas sostenibles de salida de la violencia y apoyar el bienestar y la dignidad humana de todas las personas.

### **Expandir la atención en salud mental para las víctimas de la violencia**

El trauma producido por la violencia trasciende la dimensión puramente psicológica. Obstruye las oportunidades, deteriora las redes y quebranta las aspiraciones. Impide a las víctimas alcanzar sus objetivos, superar sus privaciones y compartir activamente los beneficios de la participación económica, social y

política. La atención de salud y otras iniciativas dirigidas a las víctimas deben reconocer la importancia de la salud mental en la reparación integral de los afectados.

### **Invertir en capital social para reformar la política local**

Cuando las voces poderosas apaciguan las voces desfavorecidas, la violencia conduce a la disolución del tejido social y la gobernanza democrática. Para reformar los entornos políticos locales, las inversiones en capital social deben estar dirigidas a reestablecer la confianza social y la cooperación entre las víctimas y las comunidades empobrecidas y alentar la acción colectiva. Pueden extraerse importantes lecciones de la lucha de las poblaciones indígenas de toda la región, especialmente de América del Sur y América Central, para proteger sus territorios con su capital social y motivadas por su patrimonio natural.

### **Construir capacidad estadística en materia de datos sobre la violencia**

En muchos países de la región, la capacidad estadística para medir, diagnosticar y analizar la violencia es limitada. Los sistemas estadísticos a menudo tienen fallas en la periodicidad de recolección y el nivel de desagregación de los datos, carecen de criterios uniformes para la recolección y clasificación de datos entre distintos organismos, carecen de independencia y transparencia, o están sujetos a manejos políticos inapropiados. Sin datos precisos sobre la violencia, los gobiernos están en riesgo de no poder diseñar y focalizar adecuadamente las respuestas de política. La recopilación de mejores datos sobre la violencia en la región requerirá un esfuerzo amplio y colaborativo que involucre a agentes de diferentes sectores de la sociedad y a diferentes niveles, incluidas las organizaciones multilaterales que pueden promover la colaboración entre países para iniciativas de recopilación de datos.

## Referencias

- Aboal, Diego, Bibiana Lanzilotta, Magdalena Dominguez, y Maren Vairo. 2016. "The Cost of Crime and Violence in Five Latin American Countries". *European Journal on Criminal Policy and Research*, 22 (4): 689–711.
- Acemoglu, Daron, James A. Robinson, y Rafael J. Santos. 2013. "The Monopoly of Violence: Evidence from Colombia". *Journal of the European Economic Association*, 11(supplement 1), 5–44.
- Acemoglu, Daron, Simon Johnson, y James A. Robinson. 2001. "The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation". *American Economic Review*, 91 (5): 1369–1401.
- ACNUR (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados). 2018. "Global Trends: Forced Displacement in 2017". 25 de junio, ACNUR, Ginebra. <https://www.unhcr.org/5b27be547.pdf>.
- Albarracín, Juan. 2018. "Criminalized Electoral Politics in Brazilian Urban Peripheries". *Crime, Law and Social Change*, 69 (4): 553–575.
- Altamirano, Melina, Sarah Berens, y Sandra Ley. 2020. "The Welfare State amid Crime: How Victimization and Perceptions of Insecurity Affect Social Policy Preferences in Latin America and the Caribbean". *Politics and Society*, 48 (3): 389–422.
- AMAP (Programa de Vigilancia y Evaluación del Ártico) y PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) 2019. *Technical Background Report to the Global Mercury Assessment 2018*. Tromsø, Noruega: Fram Centre, secretariado PVEA; Ginebra: Subdivisión de Productos Químicos y Salud, PNUMA.
- Amnistía Internacional. 2016. "Brazil: Police Killings, Impunity, and Attacks on Defenders". Envío de Amnistía Internacional al Exámen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 27ª sesión, grupo de trabajo EPU, Ginebra, del 1–12 de mayo 2017.
- Amnistía Internacional. 2019. "Annual Report 2019: Human Rights in the Americas, Review of 2019". Febrero, Amnistía Internacional. Londres. <https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR0113532020ENGLISH.PDF>.
- Amodio, Francesco. 2019. "Crime Protection Investment Spillovers: Theory and Evidence from the City of Buenos Aires". *Journal of Economic Behavior and Organization*, 159 (Marzo): 626–649.
- Arcia, Gustavo. 2012. "The Evolution of Violence: Economic Development and Intergroup Conflict in Guatemala, El Salvador, and Costa Rica". En *Economic Development Strategies and the Evolution of Violence in Latin America*, editado por William Ascher y Natalia S. Mirovitskaya, 71–93. Politics, Economics, and Inclusive Development Series. Nueva York: Palgrave Macmillan.
- Arias, Enrique Desmond. 2017. *Criminal Enterprises and Governance in Latin America and the Caribbean*. Nueva York: Cambridge University Press.
- Arjona, Ana M. 2016. *Rebelocracy: Social Order in the Colombian Civil War*. Cambridge Studies in Comparative Politics Series. Nueva York: Cambridge University Press.
- Arjona, Ana M. 2021. "The Effects of Violence on Inequality in Latin America and the Caribbean: A Research Agenda". Documento de Trabajo 12 del PNUD ALC. Documento de antecedentes para el Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2021 del PNUD, PNUD ALC, Nueva York.
- Arjona, Ana M., M. Chacon, y L. Garcia. 2020. "The Impact of Selective Violence on Political Participation: Evidence from Colombia". Manuscrito.
- Arjona, Ana M., Nelson Kasfir, y Zachariah C. Mampilly. 2015. *Rebel Governance in Civil War*. Nueva York: Cambridge University Press.

- Arjona, Ana M., y Stathis N. Kalyvas. 2012. "Recruitment into Armed Groups in Colombia: A Survey of Demobilized Fighters". En *Understanding Collective Political Violence*, editado por Yvan Guichaoua, 143–171. Conflict, Inequality and Ethnicity Series. Houndsmills, Basingstoke, Reino Unido: Palgrave Macmillan.
- Arnsten, Amy F. T. 2009. "Stress Signalling Pathways That Impair Prefrontal Cortex Structure and Function". *Nature Reviews Neuroscience*, 10 (6): 410–422.
- Ávila, Keymer. 2018. "¿Cómo analizar las actuales cifras delictivas en Venezuela?" *Amnistía internacional Venezuela* (blog), 15 de marzo 2018, <https://www.amnistia.org/en/blog/2018/03/5292/como-analizar-las-actuales-cifras-delictivas-en-venezuela>.
- Balzer, Carsten, y Jan Simon Hutta. 2012. *Transrespect versus Transphobia Worldwide: A Comparative Review of the Human-Rights Situation of Gender-Variant/Trans People*. Con Tamara Adrián, Peter Hyndal, y Susan Stryker. TvT Publication Series, 6 (Noviembre). Berlín: TGEU, Transgender Europe. [https://transrespect.org/wp-content/uploads/2015/08/TvT\\_research-report.pdf](https://transrespect.org/wp-content/uploads/2015/08/TvT_research-report.pdf).
- Banco Mundial. 2004. *The Road to Sustained Growth in Jamaica*. Report 29101. World Bank Country Study Series. Washington, DC: Banco Mundial.
- Bateson, Regina. 2012. "Crime Victimization and Political Participation". *American Political Science Review*, 106 (3): 570–587.
- Bauer, Michal, Christopher Blattman, Julie Chytilová, Joseph Henrich, Edward Miguel, y Tamar Mitts. 2016. "Can War Foster Cooperation?" *Journal of Economic Perspectives*, 30 (3), 249–74.
- BCCC (Centro de Coordinación del Convenio de Basilea), SCRC (Centro Regional del Convenio de Estocolmo para América Latina y el Caribe), y PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente). 2014. "The Minamata Convention on Mercury and Its Implementation in the Latin America and Caribbean Region". Abril, BCCC y SCRC, Montevideo, Uruguay; Oficina Regional para América Latina y el Caribe, PNUMA, Ciudad de Panamá, Panamá.
- Becker, Gary S. 1968. "Crime and Punishment: An Economic Approach". *Journal of Political Economy*, 76 (2): 169–217.
- Berens, Sarah, y Mirko Dallendörfer. 2019. "Apathy or Anger? How Crime Experience Affects Individual Vote Intention in Latin America and the Caribbean". *Political Studies*, 67 (4): 1010–1033.
- Bergmann, Adrian, Andrés Ruiz Ojeda, Carlos Silva Forné, Catalina Pérez Correa, David Marques, Hugo Acero Velasquez, Ignacio Cano, et al. 2019. *Monitor del uso de la fuerza letal en América Latina: Un estudio comparativo de Brasil, Colombia, El Salvador, México y Venezuela (2019)*. Aguascalientes, México: Centro de Investigación y Docencia Económicas. <http://www.monitorfuerzaletal.com/app/vVWScwZQSEq1SdVvDsEEXThKR96xKWrdzVuDC61.pdf>.
- Blanco, Luisa, e Isabel Ruiz. 2013. "The Impact of Crime and Insecurity on Trust in Democracy and Institutions". *American Economic Review*, 103 (3): 284–288.
- Bott, Sarah, Alessandra Guedes, Ana Paola Ruiz-Celis, y Jennifer Adams Mendoza. 2019. "Intimate Partner Violence in the Americas: A Systematic Review and Reanalysis of National Prevalence Estimates". *Revista Panamericana de Salud Pública*, 43 (20 marzo): e26.
- Bourguignon, François J., Jairo Nuñez, y Fabio José Sanchez Torres. 2003. "A Structural Model of Crime and Inequality in Colombia". *Journal of the European Economic Association*, 1 (2–3): 440–449.
- Brown, Leanora, y Keva Hibbert. 2017. "The Effect of Crime on Foreign Direct Investment: A Multi-Country Panel Data Analysis". *Journal of Developing Areas*, 51 (1): 295–307.
- BSS (Servicio Estadístico de Barbados). 2014. *Barbados Multiple Indicator Cluster Survey 2012: Final Report*. September. Bridgetown, Barbados: SEB.

- Buonanno, Paulo, y Juan F. Vargas. 2019. "Inequality, Crime, and the Long-Run Legacy of Slavery". *Journal of Economic Behavior and Organization*, 159 (marzo): 539–552.
- Burdick-Will, Julia, Jens Ludwig, Stephen W. Raudenbush, Robert J. Sampson, Lisa Sanbonmatsu, y Patrick Sharkey. 2011. "Converging Evidence for Neighborhood Effects on Children's Test Scores: An Experimental, Quasi-Experimental, and Observational Comparison". En *Whither Opportunity? Rising Inequality, Schools, and Children's Life Chances*, editado por Greg J. Duncan and Richard J. Murnane, 255–276. Chicago: Spencer Foundation; Nueva York: Russell Sage Foundation.
- Cabral, René, André Varella Mollick, y Eduardo Saucedo. 2018. "Foreign Direct Investment in Mexico, Crime, and Economic Forces". *Contemporary Economic Policy*, 37 (1): 68–85.
- CAF (Corporación Andina de Fomento) y Fundación FIA (Fundación para la Innovación Agraria). 2018. *Ella Se Mueve Segura: A Study on Women's Personal Safety in Public Transport in Three Latin American Cities*. Caracas: CAF y Fundación FIA. <https://www.fiafoundation.org/media/597611/esms-toolkit-20181219-en.pdf>.
- Cárdenas, Mauricio, y Sandra Rozo. 2008. "Does Crime Lower Growth: Evidence from Colombia". Documento de Trabajo núm. 30. Comisión de Crecimiento y Desarrollo, Banco Mundial, Washington, DC.
- Carreras, Miguel. 2013. "The Impact of Criminal Violence on Regime Legitimacy in Latin America". *Latin American Research Review*, 48 (3): 85–107.
- Carroll, Leah Anne. 2011. *Violent Democratization: Social Movements, Elites, and Politics in Colombia's Rural War Zones, 1984–2008*. Kellogg Institute Series on Democracy and Development. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.
- Castillo Muñoz, Jerónimo, Manuela Suárez Rueda, y Hugo Acero Velásquez. 2019. "Colombia". En *Monitor del uso de la fuerza letal en América Latina: Un estudio comparativo de Brasil, Colombia, El Salvador, México y Venezuela (2019)*, editado por Adrian Bergmann, Andrés Ruiz Ojeda, Carlos Silva Forné, Catalina Pérez Correa, David Marques, Hugo Acero Velasquez, Ignacio Cano, et al., 42–79. Aguascalientes, México: Centro de Investigación y Docencia Económicas.
- CDH (Consejo de Derechos Humanos). 2020. "Última advertencia: los defensores de los derechos humanos, víctimas de amenazas de muerte y asesinatos. Informe de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos, Mary Lawlor". Documento A/HRC/46/35 (24 de diciembre de 2020), Asamblea General, Naciones Unidas, Nueva York. <https://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/CFI-killings-human-rights-defenders.aspx>.
- Cederman, Lars-Erik, y Manuel Vogt. 2017. "Dynamics and Logics of Civil War". *Journal of Conflict Resolution*, 61 (9): 1992–2016.
- Ceobanu, Alin M., Charles H. Wood, y Ludmila Ribeiro. 2011. "Crime Victimization and Public Support for Democracy: Evidence from Latin America". *International Journal of Public Opinion Research*, 23 (1): 56–78.
- CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). 2021. *Gender Equality Observatory for Latin America and the Caribbean*. Consultado el 31 de marzo de 2021. <https://www.oig.cepal.org>.
- CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). 2017. "Situación de las personas afrodescendientes en América Latina y desafíos de políticas para la garantía de sus derechos". Documento de Proyectos, LC/TS.2017/121, CEPAL, Santiago, Chile.
- CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). 2018. "Mujeres afrodescendientes en América Latina y el Caribe: Deudas de igualdad". Documento de Proyectos (julio), CEPAL, Santiago, Chile.
- Carqueira, Daniel, Samira Bueno, Renato Sergio de Lima, Cristina Neme, Helder Ferreira, Paloma Palmieri Alves, David Marques, et al. 2019. *Atlas da Violência 2019*. São Paulo: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Rio de Janeiro: Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

- Chainey, Spencer, y Robert Muggah. 2020. "Homicide Concentration and Retaliatory Homicide Near Repeats: An Examination in a Latin American Urban Setting". *Police Journal: Theory, Practice and Principles*. Published ahead of print, 14 de diciembre 2020. <https://doi.org/10.1177/0032258X20980503>.
- Chevigny, Paul. 2003. "The Populism of Fear: Politics of Crime in the Americas". *Punishment and Society*, 5 (1): 77–96.
- Chioda, Laura. 2017. *Stop the Violence in Latin America: A Look at Prevention from Cradle to Adulthood*. Latin American Development Forum Series. Washington, DC: Banco Mundial.
- Choi, Soon Kyu, Shahrzad Divsalar, Jennifer Flórez-Donado, Krystal Kittle, Andy Lin, Ilan H. Meyer, y Prince Torres-Salazar. 2020. *Stress, Health, and Well-Being of LGBT People in Colombia: Results from a National Survey*. Colombia Collaborative Project (Abril). Los Angeles: Williams Institute, School of Law, University of California, Los Angeles, Los Angeles.
- CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). 2015. *Violence against Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Persons in the Americas*. Document OAS/Ser.L/V/II.rev.1 Doc. 36 (12 de noviembre). Washington, DC: CIDH, Organización de Estados Americanos.
- Clark, David H., y Patrick M. Regan. 2016. "Mass Mobilization Protest Data". Harvard Dataverse V5, Harvard University, Cambridge, MA. <https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/HTTWYL>.
- Collier, Paul, V. L. Elliott, Håvard Hegre, Anke Hoeffler, Marta Reynal-Querol, y Nicholas Sambanis. 2003. *Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy*. World Bank Policy Research Report Series. Washington, DC: Banco Mundial; Nueva York: Oxford University Press.
- Colombia Diversa. 2016. *Cuerpos excluidos, rostros de impunidad: Informe de violencia hacia personas LGBT en Colombia 2015*. Bogotá, Colombia: Colombia Diversa, Caribe Afirmativo, y la Fundación Santamaría.
- Corbacho, Ana, Julia Philipp, y Mauricio Ruiz-Vega. 2012. "Crime and Erosion of Trust: Evidence for Latin America". IDB Working Paper, DB-WP-344 (agosto), Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC.
- Córdova, Abby. 2019. "Living in Gang-Controlled Neighborhoods: Impacts on Electoral and Nonelectoral Participation in El Salvador". *Latin American Research Review*, 54 (1): 201.
- Corvalan, Alejandro, y Matteo Pazzona. 2019. "The Ambiguous Effects of Inequality: The Case of Crime". Paper presented at the joint 24th Annual Meeting of the Latin American and Caribbean Economic Association and 32nd Latin American Meeting of the Econometric Society, Puebla, México, 7–9 november 2019.
- CRS (Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos de América). 2019. "Central American Migration: Root Causes and U.S. Policy". En Focus, 27 marzo, CRS. Washington, DC.
- Cruz, José Miguel, y Gema Kloppe-Santamaría. 2019. "Determinants of Support for Extralegal Violence in Latin America and the Caribbean". *Latin American Research Review*, 54 (1): 50–68.
- Cruz, José Miguel. 2009. "Maltrato Policial en Latin America". Perspectivas desde el Barómetro de las Américas, 11, Proyecto de Opinión Pública de América Latina, Universidad de Vanderbilt, Nashville, TN.
- Cuartas, Jorge Armando, Arturo Harker, y Andrés Moya. 2016. "Parenting, Scarcity, and Violence: Theory and Evidence for Colombia". Documento CEDE, 38 (diciembre), Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, Facultad de Economía, Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia.
- CVR (Comisión de la Verdad y la Reconciliación). 2003. *Informe final de la comisión de la verdad y reconciliación*. Noviembre. Lima, Peru: CVR. <https://www.cverdad.org.pe/ifinal/>.
- Demombynes, Gabriel, y Berk Özler. 2005. "Crime and Local Inequality in South Africa". *Journal of Development Economics*, 76 (2): 265–292.



- Detotto, Claudio, y Edoardo Otranto. 2010. "Does Crime Affect Economic Growth?" *KYKLOS*, 63 (3): 330–345.
- Di Tella, Rafael, Sebastián Galiani, y Ernesto Schargrotsky. 2010. "Crime Inequality and Victim Behavior during a Crime Wave". En *The Economics of Crime: Lessons for and from Latin America*, editado por Rafael Di Tella, Sebastian Edwards, y Ernesto Schargrotsky, 175–206. National Bureau of Economic Research Conference Report Series. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research; Chicago: University of Chicago Press.
- Diamint, Rut. 2015. "A New Militarism in Latin America". *Journal of Democracy*, 26 (4): 155–168.
- Díaz Nosty, Bernardo, y Ruth A. de Frutos García. 2017. "Murders, Harassment, and Disappearances: The Reality of Latin American Journalists in the XXI Century". *Revista Latina de Comunicación Social* 72: 1418–1434.
- Doran, Maire-Christine. 2017. "The Hidden Face of Violence in Latin America: Assessing the Criminalization of Protest in Comparative Perspective". *Latin American Perspectives*, 44 (5): 183–206.
- Ehrlich, Isaac. 1973. "Participation in Illegitimate Activities: A Theoretical and Empirical Investigation". *Journal of Political Economy*, 81 (3): 521–565.
- Elsberg, Mary Carroll, Rodolfo Peña, Andrés Herrera, Jerker Liljestrand, y Anna Winkvist. 2000. "Candies in Hell: Women's Experiences of Violence in Nicaragua". *Social Science and Medicine*, 51 (11): 1595–1610.
- Enamorado, Ted, Luis F. López-Calva, Carlos Rodríguez-Castelán, y Hernán Jorge Winkler. 2016. "Income Inequality and Violent Crime: Evidence from Mexico's Drug War". *Journal of Development Economics*, 120 (mayo): 128–143.
- Fajnzylber, Pablo, Daniel Lederman, y Norman V. Loayza. 2002. "What Causes Violent Crime?" *European Economic Review*, 46 (7): 1323–1357.
- Fearon, James D., y Anke Hoeffler. 2014. Benefits and Costs of the Conflict and Violence Targets for the Post-2015 Development Agenda: Post-2015 Consensus". Conflict and Violence Assessment Paper (22 August), Copenhagen Consensus Center, Tewksbury, MA.
- Fernández-Shaw, José Luis. 2019. "Los datos de la violencia en Venezuela: en búsqueda de la transparencia metodológica para la formulación de políticas públicas efectivas en la reducción de víctimas de muertes y homicidios". Seguridad Ciudadana, Amnistía Internacional Venezuela, Caracas, Venezuela. [https://www.amnistia.org/media/5000/ai\\_sc\\_librillo4.pdf](https://www.amnistia.org/media/5000/ai_sc_librillo4.pdf).
- Flake, Dallan F., y Renata Forste. 2006. "Fighting Families: Family Characteristics Associated with Domestic Violence in Five Latin American Countries". *Journal of Family Violence*, 21 (1): 19–29.
- Flores-Macías, Gustavo A., y Jessica Zarkin. 2019. "The Militarization of Law Enforcement: Evidence from Latin America". *Perspectives on Politics*, 27 de diciembre. <https://doi.org/10.1017/S1537592719003906>.
- Front Line. 2020. "Front Line Defenders Global Analysis 2019". Front Line, Blackrock, Irlanda.
- Galiani, Sebastián, Laura Jaitman, y Federico Weinschelbaum. 2020. "Crime and Durable Goods". *Journal of Economic Behavior and Organization*, 173 (mayo): 146–163.
- Gallego, Jorge A. 2018. "Civil Conflict and Voting Behavior: Evidence from Colombia". *Conflict Management and Peace Science*, 35 (6): 601–621.
- Gaviria, Alejandro, y Carmen Pagés. 2002. "Patterns of Crime Victimization in Latin American Cities". *Journal of Development Economics*, 67 (1): 181–203.
- Gaviria, Alejandro. 2002. "Assessing the Effects of Corruption and Crime on Firm Performance: Evidence from Latin America". *Emerging Markets Review*, 3 (3): 245–268.
- GMH (Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación). 2013. *¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad*. Bogotá, Colombia: Centro Nacional de Memoria Histórica.

- González, Yanilda. 2019. "The Social Origins of Institutional Weakness and Change: Preferences, Power, and Police Reform in Latin America". *World Politics*, 71 (1): 44–87.
- GRISUL (Grupo de pesquisa em Relações Internacionais e Sul Global). 2018. "Pacha: Defending the Land; Extractivism, Conflicts, and Alternatives in Latin America and the Caribbean". GRISUL, Political Science Faculty, Federal University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
- Gutiérrez Sanín, Francisco, Tatiana Acevedo, y Juan Manuel Viatela. 2007. "Violent Liberalism? State, Conflict and Political Regime in Colombia, 1930-2006: An Analytical Narrative on State-Making". Crisis States Research Centre Working Paper, 19, Crisis States Research Centre, Development Studies Institute, Londres.
- Gutiérrez-Romero, Roxana, y Mónica Oviedo. 2017. "The Good, the Bad and the Ugly: The Socioeconomic Impact of Drug Cartels and Their Violence". *Journal of Economic Geography*, 18 (6): 1315–1338.
- Heckman James J., Jora Stixrud, y Sergio S. Urzua. 2006. "The Effects of Cognitive and Noncognitive Abilities on Labor Market Outcomes and Social Behavior". *Journal of Labor Economics*, 24 (3): 411–482.
- Heckman, James J., y Yona Rubinstein. 2001. "The Importance of Noncognitive Skills: Lessons from the GED Testing Program". *American Economic Review*, 91 (2): 145–149.
- Hillis, Susan, James Mercy, Aداugo Amobi, y Howard Kress. 2016. "Global Prevalence of Past-Year Violence against Children: A Systematic Review and Minimum Estimates". *Pediatrics*, 137 (3): e20154079.
- Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. 2016. *Organized Crime and Illegally Mined Gold in Latin America*. Abril, Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, Ginebra.
- International Crisis Group. 2017. "Mafia of the Poor: Gang Violence and Extortion in Central America". Informe sobre América Latina, 62 (6 de abril), International Crisis Group, Bruselas.
- International Crisis Group. 2020. "Leaders under Fire: Defending Colombia's Front Line of Peace". Latin America Report, 82 (6 de octubre), International Crisis Group, Bruselas. <https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/andes/colombia/82-leaders-under-fire-defending-colombias-front-line-peace>.
- Iqbal, Zaryab. 2006. "Health and Human Security: The Public Health Impact of Violent Conflict". *International Studies Quarterly*, 50 (3): 631–649.
- Jaffe, Rivke. 2013. "The Hybrid State: Crime and Citizenship in Urban Jamaica". *American Ethnologist*, 40 (4): 734–748.
- Jaitman, Laura, ed. 2017. *The Costs of Crime and Violence: New Evidence and Insights in Latin America and the Caribbean*. Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo.
- Jordan, Carol E., Rebecca Campbell, y Diane R. Follingstad. 2010. "Violence and Women's Mental Health: The Impact of Physical, Sexual, and Psychological Aggression". *Annual Review of Clinical Psychology*, 6 (abril): 607–628.
- Kelly, Morgan. 2000. "Inequality and Crime". *Review of Economics and Statistics*, 82 (4): 530–539.
- Kornhauser, Ruth Rosner. 1978. *Social Sources of Delinquency: An Appraisal of Analytic Models*. Chicago: University of Chicago Press.
- Krause, Krystin. 2014. "Supporting the Iron Fist: Crime News, Public Opinion, and Authoritarian Crime Control in Guatemala". *Latin American Politics and Society*, 56 (1): 98–119.
- Lagos, Marta, y Lucía Dammert. 2012. "La Seguridad Ciudadana: El problema principal de América Latina". *Corporación Latinobarómetro*, 9 (mayo): 21–48.
- Lane, Jodi, Nicole E. Rader, Billy Henson, Bonnie S. Fisher, y David C. May. 2014. *Fear of Crime in the United States: Causes, Consequences, and Contradictions*. Durham, NC: Carolina Academic Press.

- Larrain, Soledad. 1993. "Estudio de frecuencia de la violencia intrafamiliar y la condición de la mujer Chilena". Organización Panamericana de la Salud, Santiago, Chile.
- Lederman, Daniel, Norman V. Loayza, y Ana María Menéndez. 2002. "Violent Crime: Does Social Capital Matter?" *Economic Development and Cultural Change*, 50 (3): 509–539.
- Legrand, Diego. 2020. "Falsos positivos: crudos testimonios ante la JEP". *El Tiempo*, 17 de mayo 2020. <https://www.eltiempo.com/colombia/falsos-positivos-dos-crudos-testimonios-ante-la-jep-496344>.
- Lessing, Benjamin. 2018. *Making Peace in Drug Wars: Crackdowns and Cartels in Latin America*. Cambridge Studies in Comparative Politics Series. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press.
- Lessing, Benjamin. 2020. "Conceptualizing Criminal Governance". *Perspectives on Politics*, 20 de julio, <https://doi.org/10.1017/S1537592720001243>.
- Ley, Sandra. 2018. "To Vote or Not to Vote: How Criminal Violence Shapes Electoral Participation". *Journal of Conflict Resolution*, 62 (9): 1963–1990.
- Loayza, Norman V., y Jamele Rigolini. 2016. "The Local Impact of Mining on Poverty and Inequality: Evidence from the Commodity Boom in Peru". *World Development*, 84 (agosto): 219–234.
- Machin, Stephen J, y Costas Meghir. 2004. "Crime and Economic Incentives". *Journal of Human Resources*, 39 (4): 958–979.
- Magaloni, Beatriz, Gustavo Robles, Aila M. Matanock, Alberto Diaz-Cayeros, y Vidal Romero. 2020. "Living in Fear: The Dynamics of Extortion in Mexico's Drug War". *Comparative Political Studies*, 53 (7): 1124–1174.
- Malone, Mary Fran T. 2010. "The Verdict Is In: The Impact of Crime on Public Trust in Central American Justice Systems". *Journal of Politics in Latin America*, 2 (3): 99–128.
- Mampilly, Zachariah C. 2011. *Rebel Rulers: Insurgent Governance and Civilian Life during War*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Marques, David, Ignacio Cano, Samira Bueno Nunes, y Terine Husek. 2019. "Brasil". En *Monitor del uso de la fuerza letal en América Latina: Un estudio comparativo de Brasil, Colombia, El Salvador, México y Venezuela (2019)*, editado por Adrián Bergmann, Andrés Ruiz Ojeda, Carlos Silva Forné, Catalina Pérez
- Martinez-Alier, Joan. 2021. "Mapping Ecological Distribution Conflicts: The EJAtlas". *Extractive Industries and Society*. De próxima publicación, 23 de Febrero, 2021. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214790X21000289>.
- McLeod, Jane D., y Danielle L. Fettes. 2007. "Trajectories of Failure: The Educational Careers of Children with Mental Health Problems". *American Journal of Sociology*, 113 (3): 653–701.
- Mejía, Daniel, y Pascual Restrepo. 2016. "Crime and Conspicuous Consumption". *Journal of Public Economics*, 135 (marzo): 1–14.
- Merton, Robert K. 1938. "Social Structure and Anomie". *American Sociological Review*, 3 (5): 672–682.
- Molano, Andres, Arturo Harker, y Juan Camilo Cristancho. 2018. "Effects of Indirect Exposure to Homicide Events on Children's Mental Health: Evidence from Urban Settings in Colombia". *Journal of Youth and Adolescence*, 47 (10): 2060–2072.
- Moloney, Anastasia. 2019. "LGBT+ Murders at 'Alarming' Levels in Latin America—Study". *Everythingnews* (blog), 8 de agosto 2019. <https://www.reuters.com/article/idUSL8N2525U7>.
- Molteno, Marion, Kimberly Ogadhoh, Emma Cain, y Bridget Crumpton, eds. 1999. *Towards Responsive Schools: Case Studies from Save the Children*. Education Research Paper, 38. Londres: UK Department for International Development.

- Muggah, Robert, y Katherine Aguirre Tobón. 2018. "Citizen Security in Latin America: Facts and Figures". Igarapé Institute Strategic Paper 33 (abril), Igarapé Institute, Rio de Janeiro.
- Muggah, Robert. 2019. "Reviewing the Costs and Benefits of Mano Dura Versus Crime Prevention in the Americas". En *The Palgrave Handbook of Contemporary International Political Economy*, editado por Timothy M. Shaw, Laura C. Mahrenbach, Renu Modi, y Xu Yi-chong, 465–483. Palgrave Handbooks in IPE Series. Londres: Palgrave Macmillan.
- Muñoz Acebes, César. 2020. "Brazil Suffers Its Own Scourge of Police Brutality". *Americas Quarterly*, 3 junio. <https://www.americasquarterly.org/article/brazil-suffers-its-own-scourge-of-police-brutality/>.
- Murnane, Richard J., John B. Willett, M. Jay Braatz, y Yves Duhaldeborde. 2001. "Do Different Dimensions of Male High School Students' Skills Predict Labor Market Success a Decade Later? Evidence from the NLSY". *Economics of Education Review*, 20 (4): 311–320.
- NIMOS (Instituto Nacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo en Suriname), SBB (Fundación para el Manejo Forestal y el Control de la Producción), y UNIQUE. 2017. *Background Study for REDD+ in Suriname: Multi-Perspective Analysis of Drivers of Deforestation, Forest Degradation, and Barriers to REDD+ Activities*. Paramaribo, Suriname: NIMOS y SBB.
- Nsoesie, Elaine Okanyene, Antonio S. Lima Neto, Jonathan Jay, Hailun Wang, Kate Zinszer, Sudipta Saha, Adyasha Maharana, Fatima Marinho, y Aduino Martins Soares Filho. 2020. "Mapping Disparities in Homicide Trends across Brazil: 2000–2014". *Injury Epidemiology*, 7 (1): 1–11.
- O'Donnell, Guillermo. 1993. "On the State, Democratization and Some Conceptual Problems: A Latin American View with Glances at Some Postcommunist Countries". *World Development*, 21 (8): 1355–1369.
- OMS (Organización Mundial de la Salud), LSHTM (Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres), y SAMRC (Consejo Sudafricano de Investigación Médica). 2013. "Global and Regional Estimates of Violence against Women: Prevalence and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non-Partner Sexual Violence." OMS, Ginebra. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241564625>.
- ONU Mujeres (Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres). 2012. "Development Agenda Post 2015, Gender Equality in the Future We Want: Inequality and Gender in Latin America and the Caribbean". ONU Mujeres, Nueva York. [http://americalatinagenera.org/es/documentos/post2015\\_fichas/Inequality.pdf](http://americalatinagenera.org/es/documentos/post2015_fichas/Inequality.pdf).
- ONU Mujeres (Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres) y PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 2020. "COVID-19 Gender Response Tracker". Global Fact Sheet, Versión 1 (28 de septiembre), Naciones Unidas, Nueva York.
- Pérez, Orlando J. 2003. "Democratic Legitimacy and Public Insecurity: Crime and Democracy in El Salvador and Guatemala". *Political Science Quarterly*, 118 (4): 627–644.
- PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 2009. *Abrir espacios para la seguridad ciudadana y el desarrollo humano: Informe sobre Desarrollo Humano para América Central, 2009–2010*. Ciudad de Panamá: Centro Regional para América Latina y el Caribe PNUD; Bogotá: D'Vinni S.A.
- PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 2012. *Caribbean Human Development Report 2012: Human Development and the Shift to Better Citizen Security*. Nueva York: PNUD.
- PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 2013. *Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con rostro humano: Diagnóstico y propuestas para América Latina*. Nueva York: PNUD.
- Ponce, Aldo F. 2019. "Violence and Electoral Competition: Criminal Organizations and Municipal Candidates in Mexico". *Trends in Organized Crime*, 22 (2): 231–254.

- Porter, Matthew, y Nick Haslam. 2005. "Predisplacement and Postdisplacement Factors Associated with Mental Health of Refugees and Internally Displaced Persons: A Meta-Analysis". *Jama, Journal of the American Medical Association*, 294 (5): 602–612.
- Pshisva, Rony, y Gustavo A. Suarez. 2010. "Capital Crimes: Kidnappings and Corporate Investment in Colombia". En *The Economics of Crime: Lessons for and from Latin America*, editado por Rafael Di Tella, Sebastian Edwards, y Ernesto Schargrotsky, 63–100. National Bureau of Economic Research Conference Report Series. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research; Chicago: University of Chicago Press.
- Rasch, Elisabet Dueholm. 2017. "Citizens, Criminalization and Violence in Natural Resource Conflicts in Latin America". *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, 103 (junio): 131–142.
- Reuter, Peter. 2009. "Systemic Violence in Drug Markets". *Crime, Law and Social Change*, 52 (3): 275–284.
- Ríos Contreras, Viridiana. 2014. "The Role of Drug-Related Violence and Extortion in Promoting Mexican Migration: Unexpected Consequences of a Drug War". *Latin American Research Review*, 49 (3): 199–217.
- Robinson, James A. 2013. "Colombia: another 100 Years of Solitude?" *Current History*, 112 (751): 43–48.
- Romero, Mauricio, y Santiago Saavedra. 2021. "Communal Property Rights and Deforestation". *Journal of Development Studies*, 57 (6): 1038–1052.
- Rondon, Vinícius Velasco, y Mônica Viegas Andrade. 2003. "Custos da criminalidade em Belo Horizonte". *Economia*, 4 (2): 223–259.
- Ruiz Estrada, Mario Arturo, y Ibrahim Ndoma. 2014. "How Crime Affects Economic Performance: The Case of Guatemala". *Journal of Policy Modelling*, 36 (5): 867–882.
- Saffon Sanín, María Paula. 2021. "The Colombian Peace Agreement: A Lost Opportunity for Social Transformation?" En *The Colombian Peace Agreement: A Multidisciplinary Assessment*, editado por Jorge Luis Fabra-Zamora, Andrés Molina-Ochoa, y Nancy C. Doubleday, 70–90. Routledge Studies in Peace and Conflict Resolution Series. Abingdon, Reino Unido: Routledge.
- Save the Children. 2017. "Violencia contra adolescentes en América Latina y el Caribe". Save the Children, Ciudad de Panamá, Panamá. <https://www.refworld.org.es/pdfid/5af0c5684.pdf>.
- Schargrotsky, Ernesto, y Lucia Freira. 2021. "Inequality and Crime in Latin America and the Caribbean: New Data for an Old Question Documento de Trabajo 13 del PNUD ALC. Documento de antecedentes para el Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2021 del PNUD, PNUD ALC, Nueva York.
- Schröder, Patrick, Manuel Albaladejo, Pía Alonso Ribas, Melissa MacEwen, y Johanna Tilkanen. 2020. "The Circular Economy in Latin America and the Caribbean: Opportunities for Building Resilience". Documento de investigación (septiembre), Programa de Energía, Medio Ambiente y Recursos, Chatham House, Royal Institute of International Affairs, London.
- Secretaría de la Declaración de Ginebra. 2011. *Global Burden of Armed Violence 2011: Lethal Encounters*. Ginebra: Secretaría de la Declaración de Ginebra; Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press.
- Shaw, Clifford R., y Henry D. McKay. 1942. *Juvenile Delinquency and Urban Areas*. Chicago: University of Chicago Press.
- SinViolencia LGBTI. 2019. "El prejuicio no conoce fronteras: Homicidios de lesbianas, gay, bisexuales, trans en países de América Latina y el Caribe 2014–2019". Agosto, Red Regional de Información sobre Violencias LGBT, Bogotá, Colombia. [https://sinviolencia.lgbt/wp-content/uploads/2019/08/Informe\\_Prejuicios\\_compressed.pdf](https://sinviolencia.lgbt/wp-content/uploads/2019/08/Informe_Prejuicios_compressed.pdf).
- Soares, Rodrigo Reis, Juliano J. Assunção, y Tomás F. Goulart. 2012. "A Note on Slavery and the Roots of Inequality". *Journal of Comparative Economics*, 40 (4): 565–580.

- Soares, Rodrigo Reis, y Joana Naritomi. 2010. "Understanding High Crime Rates in Latin America: The Role of Social and Policy Factors". En *The Economics of Crime: Lessons for and from Latin America*, editado por Rafael Di Tella, Sebastian Edwards, y Ernesto Schargrotsky, 19–60. National Bureau of Economic Research Conference Report Series. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research; Chicago: University of Chicago Press.
- Soares, Rodrigo Reis. 2006. "The Welfare Cost of Violence across Countries". *Journal of Health Economics*, 25 (5): 821–846.
- Soares, Rodrigo Reis. 2015. "Welfare Costs of Crime and Common Violence". *Journal of Economic Studies*, 42 (1): 117–137.
- Steel, Zachary, Tien Chey, Derrick Silove, Claire Marnane, Richard A. Bryant, y Mark van Ommeren. 2009. "Association of Torture and Other Potentially Traumatic Events with Mental Health Outcomes among Populations Exposed to Mass Conflict and Displacement: A Systematic Review and Meta-Analysis". *Jama, Journal of the American Medical Association*, 302 (5): 537– 549.
- Swanberg, Jennifer E., T. K. Logan, y Caroline Macke. 2005. "Intimate Partner Violence, Employment, and the Workplace: Consequences and Future Directions". *Trauma, Violence, and Abuse*, 6 (4): 286–312.
- Teicher, Martin H. 2002. "Scars That Won't Heal: The Neurobiology of Child Abuse". *Scientific American*, 286 (3): 68–75.
- Temblores ONG. 2019. "Qué maricada con nuestros derechos". Diciembre, Temblores, Bogotá.
- Temper, Leah, Daniela del Bene, y Joan Martinez-Alier. 2015. "Mapping the Frontiers and Front Lines of Global Environmental Justice: The EJAtlas". *Journal of Political Ecology*, 22 (1): 255–278.
- Trejo, Guillermo, y Sandra Ley. 2021. "High-Profile Criminal Violence: Why Drug Cartels Murder Government Officials and Party Candidates in Mexico". *British Journal of Political Science*, 51 (1): 203–229.
- Trelles, Alejandro, y Miguel Carreras. 2012. "Bullets and Votes: Violence and Electoral Participation in Mexico". *Journal of Politics in Latin America*, 4 (2): 89–123.
- UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia). 2017. *A Familiar Face: Violence in the Lives of Children and Adolescents*. Nueva York: UNICEF.
- UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito). 2012. "Transnational Organized Crime in Central America and the Caribbean: A Threat Assessment". Septiembre, UNODC, Viena.
- UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). 2018. "Global Report on Trafficking in Persons 2018". United Nations, New York.
- Vélez, María Alejandra, Juan Robalino, Juan Camilo Cárdenas, Andrea Paz, y Eduardo Pacay. 2020. "Is Collective Titling Enough to Protect Forests? Evidence from Afro-Descendant Communities in the Colombian Pacific Region". *World Development*, 128 (abril): 104837.
- Visconti, Giancarlo. 2020. "Policy Preferences after Crime Victimization: Panel and Survey Evidence from Latin America". *British Journal of Political Science*, 50 (4): 1481–1495.
- Yashar, Deborah J. 2018. *Homicidal Ecologies: Illicit Economies and Complicit States in Latin America*. Nueva York: Cambridge University Press.

## LA DEMOCRACIA PARITARIA COMO HORIZONTE POLÍTICO PARA LA RECUPERACIÓN

En las tres últimas décadas, ALC ha presenciado logros significativos en el ejercicio del derecho de las mujeres a la participación política. En América Latina, seis mujeres fueron elegidas democráticamente como presidentas, aunque ninguna mujer ocupa actualmente este cargo. Desde la década de 1990, el liderazgo de las mujeres en la esfera pública ha aumentado rápidamente. La participación de las mujeres en gabinetes ministeriales, parlamentos y ayuntamientos, se ha duplicado o triplicado (PNUD, ONU Mujeres e Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), 2019). Sin embargo, todavía falta mucho para alcanzar la paridad de género. Si todos los países mantuvieran la misma dinámica de aumento en la representación de género sin retrocesos, aún se requerirían unos 30 años más para alcanzar un escenario de paridad parlamentaria.

A nivel nacional, la participación de las mujeres en la toma de decisiones sigue enfrentando obstáculos. En 2019, el 30 por ciento de los gabinetes ministeriales y el 27 por ciento de los puestos en las cortes supremas de América Latina estaban ocupados por mujeres, mientras que la proporción de mujeres en los parlamentos nacionales era del 27,4 por ciento a principios de 2021<sup>1</sup>. Durante el mismo período, hubo mujeres en el Caribe desempeñándose como Jefas de Estado o de gobierno o como representantes virreinales, y las mujeres ocuparon el 23,8 por ciento de los cargos ministeriales (ONU Mujeres, 2018). En 2018, las mujeres representaron el 47 por ciento de los cargos de jueces en las cortes supremas y el 63,3 por ciento de los escaños del Tribunal Supremo del Caribe Oriental<sup>2</sup>. Las mujeres legisladoras en el Caribe ocupan actualmente el 39,5 por ciento de los escaños parlamentarios<sup>3</sup>.

En la gobernanza local, el progreso hacia la equidad de género en el liderazgo político aún tiene un largo camino por recorrer. En toda América Latina y el Caribe, las mujeres ocuparon solo el 24,5 por ciento de los puestos del gobierno local<sup>4</sup>. En

---

<sup>1</sup> PNUD, ONU Mujeres, e Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) (2019); ver también la plataforma UIP Parline (Datos Globales sobre Parlamento Nacionales) (repositorio de datos), Unión Interparlamentaria, Ginebra, <https://data.ipu.org/content/parline-global-data-national-parliaments>.

<sup>2</sup> Ver el Observatorio de Igualdad de Género para América Latina y el Caribe (tablero de indicadores), Comisión para América Latina y el Caribe, Santiago, Chile, <https://oig.cepal.org/en>.

<sup>3</sup> Ver la plataforma UIP Parline (Datos Globales sobre Parlamento Nacionales) (repositorio de datos), Unión Interparlamentaria, Ginebra, <https://data.ipu.org/content/parline-global-data-national-parliaments>.

<sup>4</sup> Ver Indicadores ODS (tablero de indicadores), División de Estadística, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Naciones Unidas, Nueva York, <https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/>.

América Latina, la participación de las mujeres en las administraciones locales alcanzó un pico histórico del 13,3 por ciento en 2018 (PNUD, ONU Mujeres e IDEA, 2019). Los datos equivalentes para el Caribe son escasos, pero tan solo el 9,1 por ciento de los alcaldes en Saint Kitts y Nevis son mujeres, y la proporción de alcaldesas mujeres en Belice, Dominica, Jamaica y Trinidad y Tobago es prácticamente nula.

Los cambios recientes en la participación política de las mujeres en la región se han caracterizado por lo siguiente:

- *La disparidad entre países:* pocos países han introducido medidas diseñadas para que la paridad de género tenga un impacto generalizado en los cuerpos de decisión de elección popular.
- *Avances notables en el poder legislativo:* la paridad (53,1 por ciento en Bolivia) o casi paridad (48,2 por ciento en México) en las cámaras bajas contrasta con los aún inquebrantables techos de cristal que persisten en las ramas judiciales y electorales de toda la región.
- *Algunas mejoras en el poder ejecutivo reflejan las complejidades inherentes al cambio:* el porcentaje promedio de mujeres en posiciones de liderazgo en la región puede haberse triplicado, pero las dirigentas mujeres continúan estando relegadas a puestos de menor impacto político.
- *Amplias brechas a distintos niveles de gobierno:* retrocesos en la paridad de género en los gobiernos locales ilustran el hecho de que las mujeres se enfrentan a los mayores obstáculos en el acceso a nombramientos directos.
- *El ritmo lento de los cambios en la dinámica de acceso al poder al interior de las organizaciones políticas.*
- *La ausencia de un enfoque interseccional en la ampliación de los derechos políticos:* los avances hacia la paridad no se han traducido en una mayor representación de mujeres indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, migrantes, con identidad de género diversa o jóvenes (ONU Mujeres, 2021).
- *La persistencia de barreras institucionales y culturales:* esto incluye prácticas nocivas, normas sociales discriminatorias, estereotipos de género y violencia política, que limitan la realización plena de los derechos políticos de las mujeres; oposición dentro de los partidos políticos hacia la igualdad de género; y la existencia de condiciones desiguales en el posicionamiento de las mujeres líderes y su acceso a la financiación de campañas (ONU Mujeres, 2021).

Este es el nuevo contexto de una región que ha privilegiado las reformas jurídicas como motor de cambio para enfrentar la subrepresentación de las mujeres en la esfera pública. La legislación sobre medidas temporales de acción afirmativa no siempre ha podido garantizar la igualdad sustantiva debido a múltiples razones, incluidos el diseño deficiente de políticas, los sistemas políticos y electorales en los que se implementan las políticas, y la resistencia a las iniciativas por parte de agentes



políticos. Ante estas limitaciones, los nuevos enfoques han avanzado progresivamente hacia un nuevo paradigma: la democracia paritaria. La democracia paritaria opera en la región como un horizonte político, expresado en compromisos políticos regionales inscritos en un marco normativo internacional que reconoce la necesidad de alcanzar la igualdad sustantiva. Los nuevos enfoques también han fomentado novedosas legislaciones orientadas a promover la paridad política y electoral a nivel nacional, trayendo consigo consecuencias sin precedentes en el acceso de las mujeres a los parlamentos. Aunque decisivas, estas iniciativas aún no han abordado las brechas étnico-raciales. Por ende, no se han observado impactos similares en el caso de la representación política de las mujeres indígenas y afrodescendientes, quienes simultáneamente se enfrentan a barreras estructurales más apremiantes.

## Referencias

- ONU Mujeres (Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres). 2018. *Women in Political Leadership in the Caribbean*. ONU Mujeres Oficina Multipaíses–Caribe, Christ Church, Barbados.
- ONU Mujeres (Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres). 2021. “Hacia una participación paritaria e inclusiva en América Latina y el Caribe. Panorama regional y aportes a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW65)”. Consulta Regional América Latina y el Caribe, Sesión Especial, 65a Sesión de la comisión de la condición Jurídica y Social de la, 24–25 de febrero, Onu Mujeres, Ciudad de Panamá, Panamá.
- PNUD, ONU Mujeres e IDEA (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres e IDEA). 2019. “Surcando olas y contra-olas: una mirada paritaria a los derechos políticos de las mujeres en América Latina”. PNUD, Nueva York

## DESTRUCCIÓN AMBIENTAL E ILEGALIDAD EN ALC

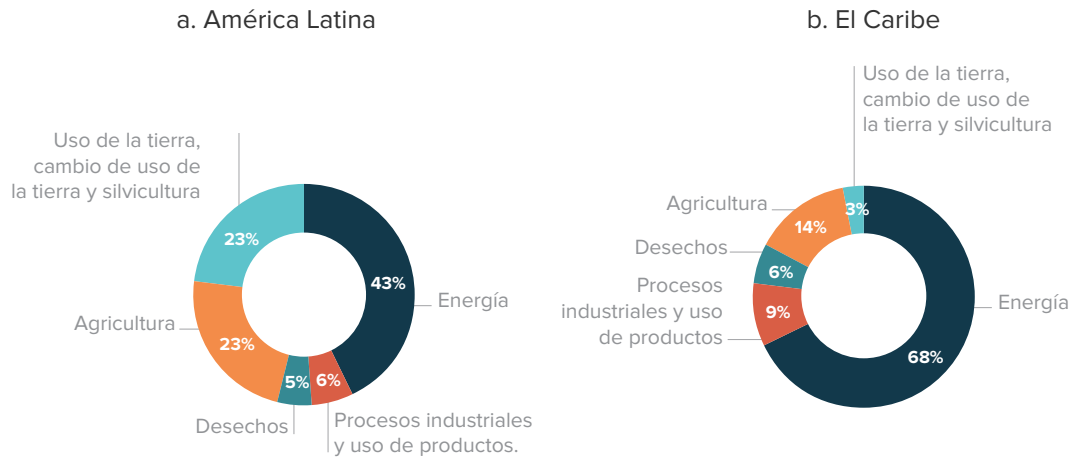
La extracción agresiva de recursos en zonas con debilidades institucionales ha cobrado un precio muy alto sobre los ecosistemas de la región. La región ha perdido casi el 13 por ciento de su superficie forestal en las últimas tres décadas (FAO, 2020). Decenas de miles de especies enfrentan amenazas de extinción cada vez mayores en ALC a pesar del estatus de la región como epicentro de biodiversidad.

La deforestación y la degradación de los bosques son resultados interrelacionados de complejos cambios en el uso de la tierra. Varios factores económicos, tecnológicos, culturales, demográficos e institucionales han sido generalmente identificados como motores de la dinámica de estos cambios. La expansión agrícola, las actividades extractivas ilegales, y la expansión de la infraestructura son algunos de los principales motores directos. La ilegalidad se manifiesta de al menos dos maneras, relacionadas con la gobernanza y la falta de recursos monetarios: (1) la extracción ilegal directa de recursos en los territorios, y (2) las maniobras ilegales para obtener permisos o concesiones para desarrollar actividades que dan lugar a la deforestación o degradación de los bosques. En los dos escenarios, los agentes locales que intentan detener las intervenciones ilegales en sus zonas han sido objeto de ataques violentos. La prevalencia de la pobreza en las comunidades locales puede agravar la destrucción del medio ambiente, especialmente si la población local encuentra en estas actividades, legales o ilegales, una oportunidad para generar ingresos. Aunque la lucha política contra el cambio climático ha abierto la posibilidad de abordar este último aspecto, hacer frente a las sinergias perjudiciales que subyacen a la deforestación y la degradación de los bosques es más complejo y requiere de una gran variedad de intervenciones.

En América Latina, el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y el sector de silvicultura (UTS) son una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) –alrededor del 23 por ciento de las emisiones totales–, mientras que en el Caribe solo aportan el 3 por ciento de las emisiones totales (figura D8.1).

**Figura D8.1. El sector UTS: una de las principales fuentes de GEI en América Latina, pero un problema menor en el Caribe**

*Emisiones de gases de efecto invernadero en América Latina y el Caribe, por sector, porcentaje de las emisiones totales*



Fuente: Crumpler *et al.* 2020a, 2020b.

Alcanzar el objetivo de reducir en un 36 por ciento las emisiones netas en el 2030, establecido en las contribuciones determinadas a nivel nacional, dependerá en gran medida de mayores inversiones en alternativas de mitigación. En general, entre el 80 por ciento y el 85 por ciento de los países de América Latina están comprometidos con estrategias de mitigación en la agricultura y el sector de UTS. Estas estrategias se centran predominantemente en el sector forestal: el 81 por ciento de los países promueve la gestión sostenible de los bosques; el 75 por ciento ha emprendido proyectos de reforestación o forestación; el 38 por ciento ha puesto en marcha planes generales de gestión de tierras forestales; el 36 por ciento ha introducido políticas para reducir la deforestación y promover la conservación de los bosques, y el 31 por ciento incluye alguna forma de gestión de incendios forestales. Alrededor de un tercio de estos países también han previsto estrategias de mitigación en tierras de cultivo y sistemas integrados, pero pocos están promoviendo la mitigación dentro del sector ganadero (Crumpler *et al.*, 2020a).

En el Caribe, el 85 por ciento de los países con un componente de adaptación explícito en sus contribuciones nacionales prevén al menos una política en ecosistemas agrícolas, y el 69 por ciento de ellos propone al menos una medida específicamente relacionada con el subsector forestal. Los esfuerzos en este subsector se centran en la reducción de la degradación y la implementación de prácticas de gestión forestal sostenible, y en la ejecución de proyectos de reforestación y forestación, la reducción de la deforestación y la promoción de la conservación de los bosques. En esta subregión, el 38 por ciento de los países con componentes de adaptación en sus contribuciones nacionales propone al menos una intervención en el sector ganadero (Crumpler *et al.*, 2020b).

El PNUD ha apoyado a los países a lo largo y ancho de la región en el proceso de diseño e implementación de políticas y medidas para reducir la deforestación y gestionar los bosques de manera sostenible. Esto ha contribuido a la mitigación del cambio climático, creando simultáneamente condiciones propicias para un crecimiento inclusivo que cierre las brechas económicas, sociales y ambientales en el camino hacia el desarrollo sostenible. Esto incluye la asignación de recursos para la implementación de esquemas de pagos por servicios ambientales (PSA) y programas de gestión forestal comunitaria. Los esquemas PSA se distinguen de otros programas de transferencias monetarias en la medida en que priorizan la conservación ambiental sobre la reducción de la pobreza como objetivo principal (Wunder, 2013). Aún así, los esquemas PSA bien diseñados tienen el potencial de proteger los recursos ambientales al tiempo que mejoran las condiciones de vida de las comunidades pobres de las zonas rurales. Lo anterior, porque aumentan el valor de los servicios ecosistémicos que se generan en áreas locales, por cuenta del costo de oportunidad que supone proteger estos servicios en lugar de explotarlos (Pagiola, Arcenas y Platais, 2005; Milder, Scherr, y Bracer, 2013). Sin embargo, las sinergias entre la protección del medio ambiente y la reducción de la pobreza no resultan automáticamente de los esquemas PSA, porque el influjo de recursos adicionales puede llevar a las comunidades a adoptar decisiones de consumo que no tienen en cuenta la sostenibilidad de su entorno, lo que implica de alguna manera que los incentivos extrínsecos pueden ir en contra de la voluntad de conservar (Wunder, 2005). Además, el hecho de que los esquemas PSA están con frecuencia pensados para corregir comportamientos negativos para el medio ambiente, en lugar de recompensar conductas adecuadas, implica que el objetivo de compensar de forma justa a las personas pobres rurales que protegen el medio ambiente y proveen servicios ecosistémicos puede verse obstaculizado por la necesidad de priorizar los pagos a otros agentes que representan la mayor amenaza para estos servicios. Como resultado, el papel de los esquemas PSA en la reducción de la pobreza en la región estará en gran medida determinado por la forma específica en que se incluya y remunere a los pobres que participen en los proyectos, así como por su inclusión en las políticas destinadas a reducir las condiciones generalizadas de pobreza (Pagiola, Arcenas y Platais, 2005). El PNUD está comprometido a apoyar esquemas de PSA focalizados en comunidades indígenas y agricultores familiares en Brasil y Ecuador, y a contribuir a la mejora del diseño de los PSA en toda la región.

## Referencias

- Crumpler, Krystal, Giulia Gagliardi, Alexandre Meybeck, Sandro Federici, Lorenzo Campos Aguirre, Mario Bloise, Valentyna Slivinska, et al. 2020a. *Regional Analysis of the Nationally Determined Contributions in Latin America: Gaps and Opportunities in the Agriculture and Land Use Sectors*. Medio ambiente y gestión de recursos naturales Documento de Trabajo, 81, Roma: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación.
- Crumpler, Krystal, Giulia Gagliardi, Alexandre Meybeck, Sandro Federici, Tanja Lieuw, Mario Bloise, Valentyna Slivinska, et al. 2020b. *Regional Analysis of the Nationally Determined Contributions in the Caribbean: Gaps and Opportunities in the Agriculture and Land Use Sectors*. Medio ambiente y gestión de recursos naturales Documento de Trabajo, 81, Roma: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación.
- FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación). 2020. *Global Forest Resources Assessment 2020: Main Report*. Roma: FAO. <https://doi.org/10.4060/ca9825en>.
- Milder, Jeffrey C., Sara J. Scherr, y Carina Bracer. 2010. "Trends and Future Potential of Payment for Ecosystem Services to Alleviate Rural Poverty in Developing Countries". *Ecology and Society*, 15 (2): 4.
- Pagiola, Stefano, Agustin Arcenas, y Gunars Platais. 2005. "Can Payments for Environmental Services Help Reduce Poverty? An Exploration of the Issues and the Evidence to Date from Latin America". *World Development*, 33 (2): 237–253.
- Wunder, Sven. 2005. "Pagos por servicios ambientales: Principios básicos esenciales". CIFOR Paper Ocasional, 42, Centro Internacional de Investigación Forestal, Jakarta, Indonesia.
- Wunder, Sven. 2013. "When Payments for Environmental Services Will Work for Conservation". *CIFOR Conservation Letters*, 6: (4): 230–237.